2.17. EL PCP-SL Y LA BATALLA POR PUNO

2.17.1. La reestructuración de las empresas agrarias

En la visión de la "revolución alanista" Puno aparecía como el caso piloto de la recuperación de la sierra para la democracia. No más "mancha india," en el "trapecio andino" –el gran bolsón de atraso y pobreza del sur andino—el Perú daría la batalla contra la subversión. El propio mandatario, personalmente, pretendía asumir el liderazgo contra los alzados.

Pero no era un asunto sencillo. Asiduo visitante de la región, pues entre el inicio de su campaña electoral a comienzos de 1984 y noviembre de 1986, Alan García visitó Puno en dieciocho ocasiones. García Pérez conocía bien las complejidades del problema: la red de intereses creados en torno a las empresas asociativas (EEAA); el intricado trasfondo de las demandas de comunidades y parcialidades; el dinamismo de los gremios campesinos, la presencia de la izquierda marxista; el compromiso de la iglesia con la lucha comunal. El mismo día en que el régimen se inauguraba, la Federación Departamental de Campesinos de Puno (FDCP) había presentado un proyecto de ley de reestructuración. Autoridades eclesiásticas del sur habían hecho conocer al gobierno su preocupación por la situación puneña. La comisión parlamentaria encargada de investigar las denuncias de corrupción en la EEAA de Puno seguía sin mostrar resultados. A comienzos de diciembre, las tomas de Kunurana habían evidenciado la ansiedad reinante.

Sobre este tenso panorama la temporada de lluvias 85-86 devino en diluvio. Tras él, los desbordes, la desesperación y, como en 1983, el hambre de tierra, la profusión de eventos y asambleas, los debates sobre el futuro regional. En 1985-86, por si fuera poco, cayeron los precios de la fibra de alpaca cuya producción estaba, fundamentalmente, en manos de productores campesinos. Una avalancha de "pliegos, solicitudes y memoriales" -reportó la FDCP- descendía sobre "las oficinas estatales de Puno y Lima."[1]

Había llegado la hora de enfrentar el asunto de la reestructuración pues de otro modo peligraba el futuro del plan para la sierra sur. Así lo comprendió el Presidente de la República que, a fines de enero de 1986, convocó a Palacio de Gobierno a un grupo de autoridades y profesionales puneños con el fin de discutir los posibles escenarios de afectación de las empresas altiplánicas. Menudearon las objeciones de carácter técnico. Al mandatario le preocupaban más los aspectos políticos. Desde esta perspectiva, no quedaba sino intervenir. Las opiniones se dividieron. Unos, optimistas, pensaban que era el verdadero inicio de la transformación del "trapecio andino." Otros, sin negar la urgencia de tomar una decisión, temían que una medida apresurada diese lugar a la destrucción de una rica acumulación empresarial.[2]

---

[1] FDCP, "Acuerdos del 3er. Congreso." Agosto 1986.
[2] Entrevista con Walter Aguirre. Puno, 14 de junio de 1993.

El 7 de febrero de 1986, los Decretos Supremos 005 y 006 que daban inicio a la reestructuración fueron finalmente promulgados. En un plazo de 120 días una comisión determinaría los montos de tierra que debían revertir al estado para su posterior adjudicación a las comunidades. Al día siguiente, Alan García se presentó en Puno donde fustigó a los dirigentes de la Asamblea Popular Regional --acusándolos de agitar irresponsablemente la necesidad campesina-- tanto como a los miembros de su propio partido, insensibles –dijo-- ante la grave situación que se vivía en la región.[3] No aclaró, sin embargo, qué porcentaje del 1'741,743 has. bajo control empresarial habría de pasar a manos comuneras y si las parcialidades o las comunidades no reconocidas tenían también derecho a tierra.

La incertidumbre acrecentó la exasperación. La Empresa Rural de Propiedad Social (ERPS) Kunurana, nuevamente, fue escenario de confrontación entre los grupos en pugna. Ahí, acatando los decretos del 7 de febrero --que dictaminaban que tanto parcelaciones privadas como ocupaciones ilegales no serían válidas en términos de futuras adjudicaciones-- las comunidades que habían invadido en diciembre del año anterior habían decidido replegarse. Esto no impidió que la vecina comunidad de Macarí fuera objeto de agresión.

> La comunidad --relató el párroco de la localidad-- había desalojado las tierras de la Empresa como también su campamento sobre esas tierras. Estaba pasteando su ganado en sus propias tierras cerca del pueblo y del Salón Comunal. A la 1 p.m llegaron a pie desde la central Kunurana unos 120 hombres, 15 a 20 mujeres y 15 a 20 jinetes todos con casco blanco o rojo, caras pintadas de negro o blanco, camuflados con chalinas y pasamontañas, en las manos, hondas, palos, fierros. En primer lugar fueron a quemar las chozas de paja que habían hecho los comuneros en el rincón ocupado. Después [...] los jinetes se lanzaron pasando a las tierras de la comunidad atropellando y arreando el ganado de los comuneros mientras los otros se acercaban en grupo compacto lanzando piedras contra los comuneros que defendían su ganado. Fue una batalla atroz entre esa gente y los comuneros que se encontraban en menor número y sin nada entre las manos la mayoría. Entonces los comuneros tuvieron que refugiarse en el Salón Comunal que fue totalmente rodeado por los asaltantes y "bombardeado" furiosamente con piedras.[4]

¿Quiénes eran los agresores? ¿Acaso una versión moderna de las bandas gamonales de los años 20? ¿O se trataba, más bien, de feudatarios en defensa desesperada de su patrimonio? El hilo de los acontecimientos se pierde en un mar de acusaciones mutuas. Sobre los puntos de vista de los supuestos atacantes algo revelan los volantes que la Federación Nacional de Trabajadores de Propiedad Social (FENATEPS) -la entidad representativa de los trabajadores de las ERPS- distribuyó por aquellos días en Ayaviri: ellos eran las verdaderas víctimas; y defensores de la reforma agraria velasquista, "el triunfo histórico más importante y justiciero en toda la vida del país." Contra lo que afirmaban sus calumniadores, a pesar de las adversidades, las empresas -decían- habían hecho progresos importantes: no habían dejado de colaborar con las comunidades y

[3] "Tomas de tierras en Puno" en *Sur* no. 92, pp. 8-28.

[4] "Relato de los hechos ocurridos en Macarí los días 28 de febrero y 4 de marzo de 1986 tales como los conoce el P. René, párroco" y "Comunicado de Solidaridad con la Iglesia de Ayaviri" firmado por los Agentes Pastorales de la Diócesis de Puno y la Prelatura de Juli. Archivo de la Vicaría de la Solidaridad de Puno (AVSP de aquí en adelante).

estaban dispuestas al "diálogo fraterno" con miras a ceder "tierras ociosas para los campesinos sin tierra," para que fuesen explotadas en "forma comunal" -insistían- no para que las parcelen y terminen sirviendo "ambiciones personales."

No eran los "verdaderos comuneros," entonces, los que estaban contra ellos --continuaba la argumentación-- sino los politiqueros, los "curas extranjeros" y su red de "mercenarios a sueldo" que, financiados por "los dólares de las agencias de los socialdemócratas franceses," pretendían destruir sus centros de trabajo. Con sus "sociólogos, ingenieros, pensadores" estos autotitulados "defensores de las comunidades" buscaban enfrentar a los campesinos de la provincia de Melgar. Llamaban, por ello, a los comuneros melgarinos a buscar un entendimiento al margen de estos "grupos financiados desde el exterior que solo buscan copar la región de Puno." "Estamos en pie de lucha -afirmaron- no frente a las comunidades campesinas sino en contra de los agitadores oportunistas y electoreros de la gente de izquierda que, después de salir electos son nuestros enemigos No. 1."

Solicitaban, por lo tanto: (1) una "reestructuración concertada" que no implicara desmembramiento o parcelación de la tierra asociativa; (2) la presencia de las Fuerzas Armadas en "las provincias asoladas por el terrorismo y el clima de violencia" y, finalmente, (3) la intervención de la Fiscalía de la Nación y del Servicio de Inteligencia Nacional para investigar

> ...los orígenes de los millonarios fondos que manejan los `Centros de Investigación Social' de procedencia foránea, como el TECIRA que financia toda la propaganda y movilización disociadora y sediciosa, para boicotear los buenos propósitos del "gobierno burgués."[5]

Unas semanas después, no obstante, la directiva de la Central de Empresas Campesinas (CENECAMP) se ofreció a colaborar.[6] Su nuevo portavoz --el ingeniero Juan Carlos Málaga Arce-- procuró reemplazar el tono aguerrido y politizado con uno de corte técnico. "Que ha habido malos manejos --declaró Málaga-- totalmente de acuerdo" pero no por ello podía satanizarse al conjunto del sector; las denuncias debían hacerse "con nombre propio" ante el Poder Judicial, buscar una sanción legal antes que amenazar o recurrir a la violencia. Con la asesoría de Málaga, varias empresas elaborarían sus propias propuestas de reestructuración. Estas, sin desatender el problema social, impedirían la destrucción de aquello que "se había levantado a través de años de esfuerzo y sacrificio".[7]

Recién a comienzos de mayo de 1986 la comisión reestructuradora designada por el Ejecutivo arribó a Puno encabezada por Gonzalo Bravo Mejía --un funcionario de carrera del Ministerio de Agricultura. Su labor se realizaría bajo grandes presiones. Las del propio Presidente

---

[5] Central de Empresas Campesinas "Puno," "A la conciencia nacional," marzo de 1986.
[6] "Entrevista" en *Hojas Escritas*, no. 7, pp. 40-43. Véase también los comunicados de la CENECAMP-Puno, "No! al derramamiento de sangre" (Abril 26, 1986) y "¿Puede la democracia permitir un derramamiento de sangre, pudiendo evitarlo?" (Mayo 30, 1986).
[7] Ibid., p. 42

de la República, las de las autoridades agrarias locales que, "como eran ex-hacendados tenían contra nosotros una oposición total"-- y, por supuesto, las de la FDCP y las comunidades que exigían tierras a cualquier costo.[8] La carencia de medios logísticos, su desconocimiento personal de la realidad puneña y falta de información confiable --catastros comunales casi no existían y muchas empresas se resistían a abrir sus archivos a los interventores-- complicarían su tarea aún más. A la larga --habría de confesar Bravo Mejía años después—"no nos fue posible realizar un proceso realmente técnico, había demasiada impaciencia para aceptar procedimientos inevitablemente prolongados, teníamos que concentrarnos en repartir".[9]

La extrema lentitud con que el proceso de reestructuración venía desenvolviéndose, no obstante, así como la débil respuesta del gobierno a los desastres naturales que castigaban a Puno crearon condiciones para actuar. En efecto, cuando el plazo de 120 días dado para completar los estudios de base se cumplía la comisión Bravo Mejía estaba recién llegando a Puno. En mayo, tras cuatro meses de lluvias intensas, entre el 30% y el 40% de la superficie cultivada del departamento estaba prácticamente perdida. Las inundaciones habían afectado importantes vías de comunicación así como a los barrios populares de la capital departamental. Los damnificados sumaban miles. Faltaban alimentos, viviendas, maquinaria para rehabilitar las carreteras. Peor aún, la situación económica comenzaba a dar señales de deterioro. Las posibilidades de migrar, entretanto, se estrechaban, obligando al poblador rural -como declaró un asistente al *Rimanakuy* de Puno- "a mirar hacia el campo" como única alternativa.[10]

2.17.2. Ande Rojo versus Trapecio Andino

La Asamblea Popular Regional de Puno, era un "poder popular en ciernes," en tanto que, en las demandas de regionalización, se vislumbraban las "semillas del autogobierno."[11] En ella el Partido Unificado Mariateguista (PUM) cifraba sus mayores esperanzas. Para apoyar su conducción, de tal suerte, la dirección del partido creó una instancia coordinadora integrada por dirigentes de todo el sur andino. "Ande Rojo" la denominaron como respuesta al "Trapecio Andino" aprista. La táctica a seguir era "desenmascarar" las intenciones "autoritarias" y "centralistas" del plan aprista; "profundizar el desgaste" del régimen, "jaqueándolo" y "emplazándolo" sin tregua, buscando en base a ello "determinadas conquistas y reformas políticas" que permitieran "acumular fuerzas en perspectiva estratégica." ¿La alternativa? Un vagamente definido "autogobierno de masas" a construirse "desde la comunidad campesina hacia arriba," sin latifundios y sin poderes locales

[8] Entrevista. Lima, 29 de julio de 1992. Véase también, Gonzalo Bravo Mejía Muñoz, "La reestructuración revolucionaria y democrática de las Empresas Campesinas iniciada en Puno" (manuscrito) en Centro de Documentación del CEPES.
[9] Entrevista con Gonzalo Bravo Mejía. Lima, junio 1989.
[10] "Rimanakuy Puno: Tierra y Paz, el pedido de los campesinos" en ibid. no. 100, Octubre 1986, pp. 15-24.
[11] PUM, Frente Regional de Puno, "Documento del Partido," abril, 1986.

gamonales; con una estructura productiva basada en empresas comunales que, con el apoyo técnico necesario, señalarían un "nuevo camino para el desarrollo del agro puneño y nacional."[12]

Las luchas puneñas, ciertamente, no eran producto de la imaginación. Las tomas de Kunurana de diciembre de 1985 fueron seguidas por nuevas movilizaciones. A inicios de abril, se produjo un paro departamental. Con el alcalde Paca Pantigoso a la cabeza, un grupo de dirigentes populares se mantuvo en huelga de hambre por varios días. El gobierno se vio obligado a enviar una comisión negociadora. La oficialización de Puno como región piloto, la reestructuración con participación campesina y el rechazo a la militarización aparecían como demandas principales al lado de los reclamos salariales y las demandas "históricas" de la región: construcción de la hidroeléctrica de San Gabán, inicio de la explotación de los yacimientos auríferos de San Antonio de Poto y asfaltado de la carretera Puno-Moquegua

Lo que hacía del remoto Puno una noticia nacional, sin embargo, era la combinación de lucha social, desastre natural y repunte subversivo que ahí tenía lugar. Solamente durante 1986, en efecto, hubo en Puno tantas acciones subversivas como durante los cinco años previos. Era, básicamente, una profundización de la campaña del PCP-SL de 1985, enfocada en erradicar la autoridad del campo y desbaratar la propiedad asociativa, “eliminación” de los dirigentes apristas y de los símbolos de la "revolución alanista."[13] A mediados de junio, el ataque del PCP-SL a la ERPS Kunurana marcaría un hito en la vida de la provincia de Melgar.

Todo comenzó con la detención, cerca de la sede administrativa de esa empresa, de varios camiones repletos de pasajeros que se trasladaban de Macarí al mercado de Ayaviri. Eran alrededor de 200 personas las que, según los testimonios, fueron obligadas por el PCP-SL a participar en el saqueo de sus instalaciones. Mientras la masa recibía un discurso, siete trabajadores apristas eran asesinados. A la frialdad prosiguió la vesanía: a las víctimas les cortaron las orejas, la lengua, a uno le sacaron los ojos, según contaron los que habían visto los cadáveres. Puesta sobre aviso, la policía de Ayaviri dio alcance al destacamento senderista en el puente de Chuquibambilla. Se produjo el enfrentamiento. Los subversivos huyeron dejando dos bajas.

En respuesta, fuerzas policiales y militares ingresaron a varias comunidades de Azángaro y Melgar dejando tras de sí innumerables denuncias de abusos y atropellos. Evitar la implantación del modelo de emergencia aplicado en Ayacucho se convirtió, entonces, en preocupación prioritaria del movimiento regional puneño a través de la consigna "paz con justicia social." Regionalización y

[12] Ibid.; "Reunión del Ande Rojo," Boletín interno de la Comisión Nacional Campesina del PUM, no. 3, Noviembre 1985; PUM, "Acuerdos del Ande Rojo" (2da. reunión plenaria), Octubre 1986 y PUM, Comisión Política, "La ley de bases de la regionalización y las tareas de la lucha descentralista," Marzo 1987.

[13] El comunicado de CORPUNO "Puno: Alto al Pro-senderismo" del 7-7-1986 listaba siete "mártires apristas víctimas del terrorismo."

reestructuración debían ocurrir sin militarización. Era la mejor garantía para cerrar el paso a los alzados en armas.[14]

En julio de 1986, se produjo un nuevo paro departamental. En Ayaviri, entretanto, un gigantesco mitin organizado por la Federación Unica de Campesinos de Melgar (FUCAM) volvió a demandar la aceleración de la reestructuración. Con el renovado apoyo de la iglesia y organizaciones gremiales y profesionales de la capital departamental, el movimiento por la tierra alcanzó un grado apreciable de legitimidad.[15] A la defensiva, el gobierno suspendió la realización del *Rimanakuy* puneño en dos ocasiones.

En abril, Rómulo León Alegría --el enviado del gobierno a negociar con la Asamblea Regional Popular-- aprovechó su presencia en Puno para acusar al PUM de valerse de instituciones como el TECIRA para acceder a fondos de la cooperación internacional. Son 72 centros de investigación --manifestó León Alegría-- los que el PUM "utiliza como fachada" para subvencionar "un proselitismo político que ensalza la lucha armada."[16] Otras figuras apristas, simultáneamente, adoptaban un tono conciliador:[17] Javier Tantaleán Arbulú --y otros en la dirección del INP— principalmente, quién, en el *Rimanakuy* puneño invitaría a "mariateguistas y hayistas" a luchar "por la paz y la vida," a resolver el problema de la tierra y construir conjuntamente "una democracia revolucionaria."[18]

"Hayistas" y "mariateguistas," estaban en Puno unos frente a los otros, conformando redes partidarias rivales orientadas, respectivamente, a colocar bajo su liderazgo las múltiples dinámicas desatadas por los diversos desastres --naturales, sociales y económicos-- que sobre Puno se habían abatido a lo largo del último lustro. Del conflicto de Kunurana a las demandas de los clubes de madres de la capital departamental emergían las fragmentadas fuerzas que el APRA y la izquierda pretendían conducir. Sin embargo, la reestructuración de las empresas asociativas seguía siendo, a mediados de 1986, la principal arena de disputa.

La realización, entre agosto y septiembre de 1986, de los mayores eventos campesinos en la historia reciente de Puno -el 3er. Congreso de la FDCP y el *Rimanakuy* gobiernista- sirvieron para subrayar las diferencias entre lo que los pumistas denominaban las vías "burocrática" y "democrática" de la reestructuración.

Con el anuncio --en el mensaje a la nación de Fiestas Patrias en Julio 28 de 1986-- de que 1'100,000 has. serían distribuidas entre las comunidades de Puno se había creado una situación nueva. Por segunda vez la intervención presidencial rompía el trance. Las 744,000 has. que la comisión Bravo Mejía había recomendado reestructurar quedaban largamente sobrepasadas.

---

[14] Asamblea Popular Regional de Puno, "Manifiesto al Pueblo Peruano," 27-6-1986.
[15] Sobre la posición de la iglesia sur andina sobre el problema de la tierra y la militarización, véase los documentos: "Urgidos por nuestra fidelidad" en *Sur* no. 92, Febrero 1986, pp. 27-28; "La tierra, don de Dios - Derecho del Pueblo" en ibid., no. 94, Abril 1986, pp. 31-41 y "Puno quiere la paz" en ibid., no. 101, Noviembre 1986, pp. 34-36.
[16] DESCO, Violencia política en el Perú, pp. 460-61.
[17] Entrevista con Jaime Johnson, Lima, Agosto 3, 1992.
[18] "Rimanakuy Puno: crónica del evento" en *Sur* no. 100, Octubre 1986, pp. 7-24.

Con el PCP-SL amenazando en Azángaro y Melgar y en vista de la inesperada capacidad que gerentes y burócratas mostraban para manipular la reestructuración, la táctica de "conquistar espacios legales" no bastaba, pensaban los dirigentes pumistas. Se requería "generar movimientos de masas" con "la fuerza suficiente para alcanzar los objetivos trazados." Volver, en otras palabras al camino señalado por las tomas de Kunurana de diciembre de 1985.[19]

Las evaluaciones partidarias de la FDCP realizadas en mayo de 1986 llamaban la atención sobre tres aspectos críticos:

(1) El gremio no había estado a la cabeza de la lucha de los damnificados por las inundaciones, unificándola con su reivindicación por la tierra;

(2) No existía "una propuesta de reestructuración departamental" que unificara las expectativas de comuneros y feudatarios;"

(3) Se había fracasado en "extender el movimiento de tomas de tierras" de Santa Rosa y Macarí al resto del departamento. La falta de "un equipo de dirigentes a nivel departamental" era, asimismo, un problema central. En la práctica había solamente dos. Tal ausencia había llevado al debilitamiento de las "direcciones provinciales intermedias." La FUCAM era la única que mantenía continuidad, sobre todo en Azángaro, Puno, Lampa, Melgar y Huancané. En el resto del departamento, la FDCP era prácticamente inexistente.

Frente al anuncio de la reestructuración de 1'100,000 has., sintiendo que podían arrebatarles la conducción de *su* base más importante, los pumistas optaron por radicalizar la lucha. Frente a la cautela de los cuadros locales, fueron los dirigentes nacionales del PUM quienes empujaron la consigna de liquidación de las EEAA. Poco tiempo después, sin mayor dilación y con grandes muestras de entusiasmo, el congreso de la FDCP se pronunciaba en favor del acuerdo aprobado en el “Ande Rojo.” El anuncio del 28 de julio de 1986 había creado la expectativa y el envalentonamiento que, ahora, la izquierda parecía capitalizar.

El congreso de la FDCP, al cual asistieron 850 delegados de todo el departamento, aprobó que las EEAA serían intervenidas de inmediato con participación de representantes comunales y de la FDCP. Habría sanción para los gerentes. Toda la propiedad asociativa --1'750,000 has. aproximadamente-- pasaría a un fondo departamental de tierras a partir del cual se realizarían las adjudicaciones a comunidades y parcialidades. A continuación, con apoyo del estado, se promovería empresas comunales. La inversión pública se concentraría en el agro. Las políticas de precios, crédito, comercialización, transferencia de tecnología se ajustarían a las necesidades comunales.

Poco tiempo después se celebró el Rimanacuy con representantes de 473 comunidades y 230 parcialidades puneñas que asistieron a la convocatoria del gobierno. Varias decenas más

[19] PUM-PUNO, "Propuesta Agraria," Mayo de 1986.

procedían de los vecinos departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna. Reunidos en 19 comisiones de trabajo, los asistentes discutieron los diversos aspectos de la problemática comunera. En las conclusiones quedó registrado el amplio repertorio de sus aspiraciones.

Entre las críticas a la verticalidad de los organismos de gobierno y los abusos cometidos por sus funcionarios se insinuaba un reclamo de fondo: "las autoridades distritales y provinciales nos amenazan y nos desprecian" marginándonos por completo de las decisiones que toman, incluso "en contra de nuestras propiedades."[20] Los funcionarios de microregiones y del Ministerio de Agricultura, en particular, "planifican y programan sin la participación de los comuneros y a espaldas de la realidad campesina," por eso, mientras de un lado realizan "obras inservibles" y "gastos insulsos," de otro, exigen a las comunidades que paguen por "largos y costosos" trámites de reconocimiento.[21]

Demandaban, de otro lado, el reconocimiento de su autonomía dentro del marco general del sistema político nacional. El derecho a nombrar sus propios jueces, exoneración de todos los impuestos, asignación de funciones municipales, harían de la comunidad, la célula básica del estado de que el propio Presidente García hablaba.

Pero la reestructuración fue, sin duda, el tema que concitó mayor interés. En sus diversos ángulos, la crítica a las empresas y la meticulosa sustentación del derecho comunal a la tierra aparece en las conclusiones de casi todas las comisiones.

Palabras más, palabras menos, eran los mismos acuerdos del 3er. Congreso de la FDCP.[22] En las conclusiones del evento gobiernista la visión comunera quedaba desplegada en toda su contradictoria dimensión: el anhelo de protección y reconocimiento al lado de las demandas de participación y autonomía; las apelaciones a la tradición y las actitudes pragmáticas. Sin mencionarlo, de otro lado, los miembros de la comisión de "Participación e Integración Comunal," por su parte, dejaron constancia de sus críticas al PUM, al referirse, al "divisionismo y politización de los organismos representativos del campesinado" y al "control" que de estos ejercían "determinados partidos políticos." No existía, como consecuencia, "una verdadera y efectiva representatividad campesina" por lo que se subrayaba la necesidad de "que las organizaciones sean netamente gremiales."[23]

Sorprendido por la contundencia de las críticas, el Presidente García intentó --en la ceremonia de clausura-- despejar las dudas que siete meses de inefectiva reestructuración habían dejado. "Me adelanto –dijo-- a las objeciones de "los vendedores de la duda," esos "políticos ambulantes que van a cada comunidad repartiendo odio," desacreditando un proceso que avanza, que se realiza sin propiciar la "guerra social" que algunos querían. "Si creen en mí –concluyó-- no me cobren altos intereses por ese crédito, hagan lo mismo que yo."

---

[20] Rimanakuy '86: Hablan los campesinos del Perú, p. 255.
[21] Ibid. p. 260.
[22] FDCP, "Acuerdos del III Congreso de la FDCP presentados al Rimanakuy," Septiembre de 1986.
[23] Ibid., p. 261

Se refería a los préstamos con "crédito cero" establecidos a través del Banco Agrario. De hecho, problemas con el reparto de "préstamos directos" a las comunidades asistentes había estado a punto de provocar el retiro de los representantes de parcialidades, quiénes al enterarse que la entrega de fondos prometidos sólo favorecerían a las comunidades, optaron por retirarse parcialmente del evento. Al día siguiente se reintegraron, luego de conversaciones con una comisión que se formó para atender este problema. Las parcialidades no podían acceder a los fondos comunales mencionados por los Jefes del INP al no tener un status legal similar al de las comunidades. Los numerosos tenientes gobernadores y presidentes de parcialidades consideraron, sin embargo, que éste no era argumento suficiente para no recibir el dinero.[24]

Al concluir su discurso, el Presidente de la República abandonó el evento, sin participar -- como lo estipulaba el programa-- en la sesión plenaria final. Sin su presencia, como manifestó el relator de una de las comisiones, "no tenía sentido leer las conclusiones porque no había nadie que los escuchara y les diera alguna solución o planteamiento."[25] El diálogo "entre presidentes" se había frustrado. Medio millón de has. habían sido repartidas al concluir el evento, pero no quedaba claro cuándo serían repartidas las restantes 600,000.

Un sentimiento de enorme impaciencia, más bien, embargó a muchos de los flamantes beneficiarios cuando, con sus resoluciones de entrega de tierra en la mano, se percataron del rosario de problemas que los reestructuradores habían dejado tras de sí: un mismo lote había sido adjudicado a varios beneficiarios; abundaban los errores en la delimitación de linderos. En muchos casos los terrenos asignados se ubicaban en zonas alejadas al domicilio de los adjudicatarios. No había claridad sobre el destino de los bienes empresariales; proliferaban las denuncias de saca ilegal de ganado y en general, la tierra distribuida era la de peor calidad. Se estaba reconociendo comunidades "fantasma" con el fin de legalizar adjudicaciones fraudulentas. Era el caso de las seis "comunidades en formación" que, en representación de los 682 trabajadores de la CAP Gigante, habían recibido 203,391 has. de las 222,837 has. originalmente controladas por esa empresa. Las autoridades no habían tomado tampoco en cuenta los títulos de los antepasados.

La realidad era que, el limitado control que el Ejecutivo tenía de los operadores locales no aseguraba la llegada de la pretendida "revolución aprista" a los confines del país. Menos aún en Puno, donde, frente a las exigencias comunales que el propio Presidente de la República alentaba, se erigía una maraña de poderes locales con probada capacidad para "subordinar a sus intereses las inversiones públicas y el poder normativo, judicial y coercitivo del Estado."[26]

Discursos de lado, la responsabilidad de decidir "todo el destino de la tierra en Puno" quedaba en manos de los funcionarios del Ministerio de Agricultura y de la Dirección de Reforma Agraria. En alianza explícita o implícita con los gerentes y los llamados "grupos de poder"

---

[24] Fuente: "Rimanakuy Puno: Crónica del evento" en *Sur* no. 100, octubre 1986, pp. 7-24.
[25] Ibid., p. 282.
[26] Telmo Rojas Alcalde, "Límites y posibilidades del desarrollo microregional" (Notas de una experiencia en la región sur)

empresarial serían aquellos quienes quedaban a cargo de bregar con la presión comunal. Más que una estrategia clara los cohesionaba un objetivo inmediato: evitar el completo desmantelamiento de ERPS, SAIS y CAPs, protegiendo los intereses de sus aliados. Sabían que no podían enfrentar abiertamente a la reestructuración pues equivalía a ponerse en contra del Presidente. Intentaron ganar tiempo: embrollando a los adjudicatarios, dilatando procedimientos, usando sus influencias para movilizar en su apoyo a las autoridades policiales y militares. Acaso confiando en que si lograban resistir lo suficiente, algún giro en la inestable situación política nacional podría permitirles recobrar la iniciativa. Paradójicamente, la presencia del PCP-SL en Puno hacía factible pensar en que una "militarización" de las provincias conflictivas traería el fin de la "agitación" comunal.

Si con los decretos supremos 005 y 006 se había abierto una intensa disputa por influir el curso del proceso de reestructuración, el anuncio del 28 de julio y la entrega de las primeras 600,000 has. terminaron de abrir la caja de Pandora. Ahora, a los procedimientos de afectación y adjudicación se añadían los reclamos de los beneficiarios insatisfechos y la desesperada movilización por obtener reconocimiento comunal; de ello dependía obtener algo del 1'100,000 has. a repartirse.

Seguir los detalles de las intrincadas dinámicas locales no era tarea fácil en aquellos días agitados. Bastaba, sin embargo, visitar las oficinas del sector Agricultura en la ciudad de Puno para percibir el conflicto que se maceraba. La indolencia de los funcionarios. Los delegados comunales merodeando los despachos. Los memoriales --redactados al instante por un mecanógrafo callejero-- en sus manos encallecidas buscando cómo penetrar el cerco burocrático. No menos complicada aparecía la situación desde la otra ribera. La influencia de ex-hacendados y propietarios agrarios -- reconocería un funcionario de la Región Agraria XXI-- no era el único factor que entorpecía el proceso. Los medios eran mínimos, los procedimientos a emprender complejos y las presiones enormes.[27]

Sobre este trasfondo los comicios municipales aparecían como un capítulo decisivo de la lucha por la primacía política en la región. "Las próximas elecciones municipales -rezaba una declaración del Ande Rojo- son una batalla política."[28]

Confirmando la tendencia establecida en las elecciones del año anterior, el PAP absorbió el voto de AP --que no presentó candidatos en esta oportunidad-- y del FNTC --más interesado, esta vez, en ganar la alcaldía de la ciudad de Arequipa-- para obtener un 53% del voto departamental, resultado que le significaba tener mayoría en 7 de las 10 provincias altiplánicas y, con ello, un control

[27] Véase al respecto, J.L. Rénique, “Estado, partidos políticos y lucha por la tierra en Puno” en *Debate Agrario* 1, octubre 1987, pp. 1-27.
[28] PUM, "Acuerdos del Ande Rojo" (Segunda Sesión Plenaria), Puno, Mayo de 1986, p. 7

masivo de la instancia municipal a nivel departamental. Era la votación más elevada obtenida por el PAP en Puno en toda su historia electoral.

El éxito del APRA --afirmaría un dirigente pumista-- había sido lograr "alejarnos de los sectores medios y atrasados."[29] No era que la IU hubiese hecho una gran labor municipal en los tres años previos. La verdad era, sin embargo, que las cifras reflejaban en parte un uso clientelístico de los recursos estatales como, por supuesto, el magnetismo que el líder aprista seguía ejerciendo sobre la población. Hasta en tres oportunidades, el Presidente de la República se había hecho presente en Puno para apoyar a los candidatos de su partido, en especial a Luis Dueñas, candidato a la alcaldía provincial de la capital altiplánica, quien había llegado a Puno en agosto de 1985 identificándose rápidamente como el vocero local de la "revolución alanista." García lo impuso como candidato a pesar de las resistencias que suscitaba en el medio local.[30] Denunciar la cercanía del PUM con los insurgentes y atacar a la Iglesia progresista estuvieron entre sus temas de campaña favoritos. Increpaba al APRA y a la burocracia local, asimismo, por haber sido el freno a las transformaciones impulsadas por el mandatario. "Yo critico a la gente del PAP –decía--por no acelerar la reestructuración para evitar que otros aprovecharan de esto."

Los efectos de la derrota izquierdista no se limitaban a Puno, y no sólo se reavivaban las críticas al liderazgo del frente IU sino que obligaba a plantearse la cuestión de su agotamiento definitivo. El debate sobre el futuro de IU causaba división incluso dentro de los propios partidos integrantes del frente. En el PUM, mientras unos enfatizaban en la necesidad de acelerar la construcción del "partido revolucionario de masas" otros se inclinaban por convocar a un "acuerdo nacional" teniendo a la IU como eje fundamental.

Mientras el PUM mostraba todas las intenciones de pasar a la acción y en el PAP la tendencia más dialogante entraba en repliegue, el intento de concertación encabezado por Juan Carlos Málaga desde la CENECAMP daba señales de colapso. Moviendo influencias, empresas como Sollocota y Aricoma consiguieron la instalación en sus predios de fuerzas policiales y militares. Era la oportunidad de asestar a la reestructuración un golpe contundente. El conflicto

---

[29] Entrevista con Víctor Torres.

[30] El discurso de Dueñas capturó el ánimo de los votantes en la capital departamental. En el norte del departamento, sin embargo, donde la FDCP tenía influencia mayor, la votación izquierdista se incrementó con respecto a las elecciones municipales anteriores: 4% en Azángaro, 24% en Carabaya, 10% en Melgar, 17% en Sandia y 25% en Lampa. En la primera de estas provincias, la izquierda había logrado retener la alcaldía provincial. En los distritos de Asillo, San Juan de Salinas, San Antón, José Domingo Choquehuanca, Chupa y Potoni, los representantes izquierdistas no habían tenido competidor puesto que el APRA se abstuvo de presentar candidatos. En Muñani el candidato de IU derrotó al del partido del gobierno. Lo contrario ocurrió en Arapa y Huatasani. En Chupa, el FNTC fue el vencedor en lo que sería uno de los escasos cuatro municipios distritales que el "cacerismo" ganaría en todo el departamento.

Por 54% contra 42% el triunfo fue para el APRA en la provincia de Melgar. En Ayaviri, la capital provincial la izquierda perdió esta vez por una diferencia inapelable. Retuvo, sin embargo, sus bases locales más importantes --Macarí, Nuñoa, Umachiri, Cupi--, perdiendo, por escasísimo margen, en Santa Rosa y Orurillo. En Lampa y Huancané, por el contrario, el PAP alcanzó hegemonía casi completa incluso en distritos en que la FDCP reclamaba tener algunas de sus bases más combativas. En esta última provincia así como en Puno y San Román --las más urbanas del departamento-- fue donde la izquierda perdió votación: -10%, -23% y -17% respectivamente. Las cifras electorales departamentales y provinciales han sido tomadas de Fernando Tuesta Soldevilla, Perú Político en Cifras, Lima: Fundación F.Ebert, 1994.

entre la comunidad campesina de Chapioco y la CAP Parina es ilustrativo del problema que estaba generándose.[31]

La CAP Parina, según la denuncia, estaba gestionando su reconocimiento como "comunidad empresarial," uno de cuyos gestores era un directivo de la cooperativa que es "empleado desde el tiempo de la Sociedad Ganadera del Sur." Por tal motivo: "....ya que el Ministerio no nos atiende ni los de Parina, la comunidad ha decidido tomar el terreno adjudicado en cualquier momento; porque tenemos el título de propiedad y un acta de entrega de la misma cooperativa de Parina en la fecha de 14 de octubre de 1986 por los señores de la comisión de reestructuración."[32]

Definitivamente, el anuncio de la entrega del 1'100,000 has. y su desmentido en la práctica había azuzado la tensión rural.

De inicios de diciembre en adelante, una serie de marchas y tomas de tierras espontáneas comenzaron a producirse en las provincias de Azángaro y Melgar. La policía respondió con aspereza. De pronto, todos en el campo eran sospechosos y con la misma tenacidad con que solicitaban la tierra, las comunidades se veían obligadas a "pedir garantías" y demostrar que sus miembros no estaban involucrados en ningún acto de subversión.[33]

A inicios de abril el IV Consejo Directivo de la FDCP convocó a una jornada de movilización a cumplirse el 19 de mayo fecha fijada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) para realizar un paro nacional. Tomar la tierra para establecer empresas comunales, tal sería el objetivo del movimiento.

A fin de cuentas, por sus propios medios, sobrepasando la indolencia de los funcionarios locales, las comunidades darían cumplimiento a las medidas promulgadas por el Presidente de la República. Así, sobre los hombros de campesinos como los de Chapioco y Punta Jallapisi --con el respaldo de los parlamentarios del PUM, una serie de ONG y el de la iglesia local-- la FDCP se convirtió en la instancia coordinadora de la más amplia movilización rural que la sierra había visto en décadas.

---

[31] "...en el RIMANACUY 86 fue entregado el título de propiedad No. 308-86 por el Señor Presidente de la República, según la resolución directoral No. 817-86 DCGR/AR de fecha 12 de setiembre de 1986, en donde a la comunidad de Chapioco le fue adjudicada una parte de la Cooperativa Agraria de Parina [...] Hasta la fecha no recibimos el terreno; solamente tenemos papel y no el terreno, porque los señores de la Cooperativa se resisten a entregarnos de dicho fundo y dicen que ellos no quieren saber nada de las leyes ni de la reestructuración [...] el jefe de la reestructuración de la Región Agraria de Puno dice que Parina no les puede entregar porque ellos son dueños, eso nos hace pensar que hay un convenio o soborno por parte de la Cooperativa."

[32] Memorial de la Federación Unitaria de Campesinos de Aricoma al Presidente de la República Dr. Alan García Pérez. Archivo de la FDCP (AFDCP de aquí en adelante).

[33] Acta de la Asamblea Extraordinaria de la Comunidad Campesina de San Miguel (Asillo). Diciembre 19, 1986.

2.17.3. El 19 de mayo de 1987

En las primeras horas del 19 de mayo todo está dispuesto para la movilización. Como ríos humanos, los comuneros discurrirán hacia los terrenos sobre los que reclaman --a veces por generaciones-- derecho a propiedad. A través de las actas redactadas al culminar la jornada podemos explorar el sentido que los propios campesinos atribuían a los hechos que protagonizaron.[34]

Justificar de manera exhaustiva por qué están recurriendo a una acción de fuerza es su preocupación mayor. La unanimidad de la decisión, la tradición comunal, el derecho legítimo a la justicia, son algunas de los argumentos justificativos. El incumplimiento de las leyes dictadas "en favor de las comunidades" por autoridades locales "corruptas y abusivas" surge como el argumento central. Ante estas, la comunidad aparece como organismo "natural" de la sociedad campesina, como instancia local del sistema político, moralmente capacitada para actuar en contra de quienes -al desoír las órdenes del Supremo Gobierno- incurren en una acción ilegal. Según los personeros de la comunidad Señor de Huanca del distrito José Domingo Choquehuanca:

> Después de recorrer las nueve horas de marcha de sacrificio con todos los padres, madres e hijos y ancianos, dentro de los cuales se incluye minusválidos, haciéndole prevalecer nuestra solicitud interpuesta al Ministerio acatando los Decretos Supremos 005 y 006 en vista de que nos encontramos en unas parcelas de no más de 2 has., que no alcanzan para trabajar en agrícola y crianza de ganados, visto que no tenemos solución en el Ministerio, decidimos nuestra marcha a los fundos solicitados...

En algunos casos hay un énfasis más directo en la responsabilidad que cabe al Ejecutivo. Los comuneros de Jilla Cajamarca, en el distrito de Potoni, por ejemplo, afirman que su decisión de actuar tiene su origen en el hecho que: "el gobierno central de la república hizo caso omiso a la reestructuración de tierra para los campesinos." De una mayor beligerancia da muestras el memorial de los comuneros de Catuyo del mismo distrito de Potoni. Son "las falsas promesas y engaños del doctor Alan García Pérez y su gobierno aprista, sus "demagogias y corrupciones" lo que los impulsa a reivindicar "nuestras tierras que ha sido quitado de nuestros antepasados" y a rechazar "todas las violencias militares que hace este gobierno." El alza del costo de vida, la inflación, los bajos precios de "nuestros productos pecuarios" y una serie de servicios desatendidos completan la larga lista de quejas y demandas.

Unos se movilizan en protesta por el incumplimiento de los decretos de febrero otros buscando corregir los desaciertos del proceso de reestructuración. Son "los malos funcionarios de Reforma Agraria" coludidos con "el grupo de poder de la SAIS Huayna Capac" --alega la

[34] Copias de los documentos que se citan a continuación fueron obtenidas en la propia sede de la FDCP en la ciudad de Puno durante los días que prosiguieron a las tomas, por razones de espacio omitimos la referencia específica a cada documento.

comunidad Choquechambi-Carpani del distrito de Muñani-- quienes "nos han postergado nuevamente" de los beneficios de la reestructuración.

Igualmente insatisfechas, varias comunidades de los distritos de Paratía y Santa Lucía, provincia de Lampa --Caluta, anexo Chullunquiani, Ipocate y Chingani-- suscriben un memorial colectivo en que exponen un conjunto de quejas. A Ipocate --la más poblada-- se le ha adjudicado el fundo Cerrillos que adolece de limitaciones diversas: "se encuentra a un día de camino y nos separa el caudaloso río Verde" además que "es secano de reducida extensión de 1,050 has." por lo que no sirve "para poder realizar trabajos y producir." Reclaman, por lo tanto, la entrega de "la Unidad Andamarca por ser cerca y colindancia y de más hectareaje." La comunidad de Caluta, de otro lado, solicita el fundo Pocomoro "ya que necesita pastos por ser año secano." La Resolución Directoral adjudicándoselo fue expedida en junio. Esta no se ha efectivizado aún, sin embargo, debido a "la apelación interpuesta por parte de la CAT Santa Lucía" mediante un expediente "firmado por el Gerente y empleados, compadres y ahijados, sin participación de los directos trabajadores." De todas maneras, siendo Pocomoro insuficiente para "trabajar y producir como Empresa Comunal, por ser rocoso, secano y mayor parte es de ichus o pajas," se solicita la adjudicación de otros terrenos adicionales que, para prevenir que sean tomados por otras comunidades, son linderados y señalizados en la jornada del 19 de mayo.

El relato que los comuneros de Canccolly hacen de la toma de las 3,000 has. que reclaman como propias describe un patrón generalizado:

> Se procedió a tomar y posesionar las tierras de los fundos arriba mencionados con las costumbres que se realizan a nivel del campo: orando al señor creador y luego se entonó las sagradas notas de nuestro Himno Nacional y luego se procedió a dar abrazos de fraternidad entre comuneros como signo de posesión de las tierras de Pachachaca, Cayconi, Sapapugio y el anexo Chejollohuata, y la recuperación de las tierras de nuestros antepasados, una vez hecho todo de acuerdo a las costumbres se procedió a instalar las chositas y toldos con sus banderas.

Siendo como es una movilización con escasos niveles de coordinación se presentan casos en que varios grupos aspiran al mismo terreno. Así, al amanecer del 19 de mayo, en circunstancias en que se encuentran abocados a la colocación de los hitos que demarcan la propiedad bajo reclamo, los comuneros de Unión Antauta encuentran: "...a nuestros compañeros comuneros de Chimpachuquisani y Killca Vilaccollo, haciendo un intercambio de ideas y buena amistad recíprocamente y luego se procedió [a firmar] un acta con el feudatario Cipriano Vilca Quispe con fines de trabajar unanimimente."

De hecho, fue en los alrededores de la SAIS Aricoma donde se produjeron las más duras disputas de la jornada.

La existencia de la Federación Unitaria de Campesinos de Aricoma (FUCA) -una cohesionada federación local que reunía a 35 comunidades de 11 distritos de las provincias de

Carabaya, Sandia y Azángaro- explica las medidas defensivas a que recurrieron empresas como Aricoma o Sollocota. La FUCA había sido creada a inicios de 1986 con el fin de "hacer frente al no cumplimiento de las leyes del Gobierno para la reestructuración." A fines de abril de 1987, la FUCA organiza una marcha de sacrificio que moviliza a cerca de 8,000 campesinos -según los organizadores- respaldados por "los señores alcaldes de los consejos municipales de Crucero, Potoni y Usicayos," más el apoyo de "el Señor Gobernador del distrito de Crucero, los Tenientes Gobernadores, Comisarios y Agentes Municipales." Se comprometen entonces a "jamás aceptar tierras de mala calidad" como lo "están haciendo las demás comunidades campesinas" exigiendo asimismo "un mínimo de 2,000 has. por comunidad ya que hay tierra sin trabajar por demás en estas empresas." Para el 19 de mayo, la FUCA acuerda que las comunidades demarcarán con "un cercado de champas o terrones, pacíficamente" la tierra que se reclama construyendo además chozas en las cuales permanecerán por 48 horas. El objetivo es lograr el envío inmediato de una "comisión reestructuradora democrática" que, con el aval del Presidente de la República, termine con la "inoperancia" de los funcionarios locales y el despotismo de los gerentes." La SAIS Aricoma, sin embargo, se ha preparado para hacer frente al desafío.

Desde las primeras horas de la mañana del día 19, grupos compuestos por "sinchis," soldados y feudatarios hostilizan a los manifestantes. Así, mientras colocan sus hitos "de piedra y champas" en el "lugar denominado Tayquicunca," comuneros de Potoni Cangalli son interceptados:

> ...por la patrulla de la Fuerza Armada solicitada por la SAIS Aricoma [...] movilizando en los vehículos de la Empresa 24 soldados y un Teniente, el conductor de un volquete llamado Don Marcos Apaza y el camión fue conducido por Don Martín López Pacha y acompañado de un guiador Don Martín Condori Huayaca y otros [...] el jefe del comando nos obligó a destruir los hitos, y también fuimos arrebatados de una Bandera Nacional de tamaño un metro y treinta aproximadamente y para cumplir con la destrucción de los hitos nos hemos visto custodiados por cinco soldados y más un representante de la SAIS Aricoma.

Los invasores, sin embargo, no se rinden. Se repliegan temporalmente, esperan la noche para retornar. Al día siguiente, los vigilantes de la SAIS inician el desalojo. Se busca identificar a los dirigentes. En algunos casos, feudatarios encapuchados los señalan. Se les interroga con aspereza. "Como no le hemos dado razón --denuncia el memorial de la comunidad Ccancolly-- nos reprimió a todos los varones y como es una decisión de la Comunidad, también las mujeres se subieron al camión."

Por la tarde del 20, la central Cayacachi de la SAIS Aricoma comienza a llenarse de detenidos. La gente de Condoriri Suchini, Nueva Esperanza de Bajo Chilluma, Yaurefina Catuyo Chico y Ajoyani es la que lleva la peor parte. Los enfrenta un grupo de "sinchis" reforzado por "los señores feudatarios y comunidades socias de la empresa" que llegan de improviso a bordo de varios camiones. "Quemaron nuestras chozas y derramaron nuestros alimentos y apachurraron nuestra Bandera Peruana muy prepotentemente" asevera el testimonio. "Eramos como 70 -afirma otro-

entre hombres, mujeres, niños, niñas, madres gestantes, madres con bebes, ancianos y ancianas que han sido llevados presos de una manera vilenta."

En la Central Cayacachi, mientras tanto, los detenidos han sido depositados en la sala de esquila de ganado:

> ...con hambre y frío, porque hemos dormido sobre el cemento, sin frazadas ni cueros, vigilados noche y día por los sinchis. Y en la noche a horas 7 p.m. del 20, los sinchis llamaron a las chicas, diciendo que esta noche, van a dormir con ellas, y nosotros no hemos permitido y al mismo tiempo amenazándonos de muerte a todos los presentes, que fuimos en número de 75 entre hombres y mujeres.

Al mediodía del 21, los detenidos llegan a 300. "Defendiéndose como leones," para ese entonces, la mayoría de sus bases comunales ha completado las 48 horas de ocupación acordadas y comienzan a confluir al pueblo de Crucero. Ahí, Porfirio Suni --secretario general de la FUCA-- organiza el traslado de unos 2,500 campesinos --"en más de 10 camiones colaborados por el pueblo"-- hasta la propia central Cayacachi con el fin de reclamar la libertad de los detenidos. "Después de un diálogo amplio con los feudatarios y el capitán de las fuerzas del orden," todos los detenidos menos uno -"por encontrársele una frase de senderista"- son liberados de su precaria prisión. Al día siguiente, un paro de 24 horas convocado por la FUCA y el SUTEP culmina con un mitin en la plaza de Crucero. Las fuerzas del orden se hacen nuevamente presentes, "armados hasta los dientes, como si fueran a la guerra entre el Perú y Chile." Un capitán se dirige a la audiencia: reconoce la legitimidad del reclamo de tierras y ofrece volver con Harold Rafael Chávez para realizar un diálogo directo sobre la cuestión de la tierra: "toda la masa estuvo esperando hasta la noche --relata el informe de la FUCA-- y no se hizo presente ni el gerente ni el capitán con sus sinchis, el pueblo y el campesinado comprendió que esto era una burla."

Mayor aún sería la irritación cuando al día siguiente "los sinchis en cantidad de 30 y feudatarios en más de 200 rodearon a la comunidad de Sallaconi" armados y encapuchados "como verdaderos sediciosos" con el fin de desalojarlos. La violencia se extiende entonces a otras zonas produciéndose redadas en las comunidades vecinas a San Antón. Acusándolos de senderistas -- denunciará un portavoz de la federación de San Antón-- los militares inquieren por los dirigentes. Cuentan con una lista de nombres. Un chofer de la SAIS Kenamari –dicen-- actúa como guía. En Muñani --según un informe de la parroquia local-- una familia de gamonales consigue el envío de tropas de la ciudad de Puno. Al llegar, "les regalaron corderos y ofrecieron una pachamanca para ganarles," indicándoles luego quiénes eran "los cabecillas de los terroristas." De la confrontación que se produce resulta el único muerto de la jornada: Pedro Laura Ochochoque de la comunidad.

En rigor, la movilización se había limitado al ámbito tradicional de influencia pumista. El gran peso de la lucha había recaído en el puñado de federaciones distritales que a través de Melgar, Azángaro y Carabaya constituían el verdadero sostén de la FDCP; San Antón, Asillo y Aricoma principalmente el 70% de las movilizaciones se produjo en Melgar, Azángaro y Carabaya. En

Huancané como en Chucuito se produjo tan solo una acción, respectivamente. En Lampa y San Román, de la misma manera, la acción fue bastante limitada. Las de Melgar tenían la ventaja de contar con el apoyo de la FUCAM la única federación provincial con existencia real en todo el departamento. El anuncio de las tomas, sin embargo, había provocado una ola de invasiones que iba más allá de lo que la FDCP era capaz de controlar. Tal como decía la enviada por la comunidad Pantipantini de Arapa --dando cuenta de la toma del fundo Rancho Chico de la SAIS Makaya-- "le hacemos presnte a la federación para que ellos defiendan a nivel provincial y departamental."

Inclusive en el caso de la FUCA --la federación distrital que había llevado sobre sus hombros el peso mayor del combate del 19 de mayo-- la presencia del gremio departamental había sido nula. De ahí que su informe a la FDCP --fechado el 24 de mayo y firmado por Porfirio Suni-- culminara con la exhortación siguiente:

> Compañero Secretario General esperamos su denuncia, apoyo y defensa a esta organización del FUCA que integra a más de 35 comunidades que durante estos días está sufriendo atropellos por demás deplorables en la historia de Carabaya, Sandia y Azángaro. Hasta el momento no contamos con ningún apoyo ni de la FDCP, Derechos Humanos, ni de los compañeros parlamentarios por Puno. Nos sentimos muy solos y esperamos que venga algún representante a alentarnos y apoyarnos, pero si nuestra lucha es fuerte nunca retrocederemos, seguiremos con más fuerza hasta el triunfo.

A todas estas flaquezas se sumaba un hecho fundamental: que la movilización no había resultado *en una ocupación efectiva de la tierra*. Muchas de las marchas --como los protagonistas lo especificaban en sus actas-- se habían limitado a *"señalizar"* los territorios bajo reclamo. Una vez concluida la colocación de hitos habían procedido a retirarse con la esperanza de que --debido a las tomas-- el gobierno enviaría "comisionados" con autoridad para proceder a la transferencia y titulación de la tierra. Básicamente lo que los comuneros requerían en ese punto era que la FDCP obtuviera sanción legal para sus reclamos.

De ahí entonces que una de las demandas presentadas en el diálogo del 5 de junio con el Ministro de Agricultura fuese: "el reconocimiento de la FDCP como central máxima del campesinado puneño."[35]

De Lima la comisión de la FDCP no volvió con las manos vacías. El gobierno había aceptado formar una comisión con capacidad resolutiva con participación de comunidades y feudatarios y con expresa exclusión de los gerentes. Había aceptado, además, legalizar las tomas y adoptar medidas para prevenir el saqueo del ganado. La Región Agraria XXI, asimismo, sería prontamente reorganizada. Poco era, no obstante, lo que la federación podía hacer para fiscalizar el cumplimiento de estos acuerdos. Los representantes de las EEAA, por su parte, no permanecieron inmóviles. Lograron que se convocara a una reunión con el fin de exponer ante los representantes del gobierno sus propios puntos de vista sobre los acontecimientos altiplánicos. A saber, que las

[35] FDCP, "Planteamientos para el diálogo con el Ministro de Agricultura, Remigio Morales Bermúdez." Junio de 1987.

tomas estaban provocando la destrucción de la industria ganadera puneña. Así, el 18 de junio de 1987, en la sala de reuniones de la CENECAMP en el centro de Lima, un grupo de gerentes y trabajadores se entrevistó con el viceministro de Agricultura. Entre los puntos que los representantes empresariales tocaron estaban: la superficialidad de los estudios de la comisión reestructuradora, las acciones ilegales contra propiedades tituladas, los desmanes de los agitadores. "Nosotros no tenemos administradores, soy un trabajador" aseveró el representante de la SAIS Huayna Cápac en cuyos terrenos se había producido la única baja fatal del 19 de mayo:

> ...nuestra empresa ha sido invadida por comuneros de Choquechambi-Carpani del distrito de Muñani, quienes dirigidos por el gobernador, alcalde, párroco, han invadido 300 has. de la mejor tierra de la empresa. Han introducido animales indiscriminadamente, extremadamente parasitados, lo que hace peligrar nuestro ganado. Han destruído los cercos de alambre, se han apoderado de ganado ovino. Los daños superan los 4 millones de intis. Los invasores han violado la Constitución. Desconocen nuestros derechos como vecinos, han negado nuestras peticiones para inscribir partidas, pagar autoavalúo. El párroco se niega a celebrar misas. Nos encontramos totalmente discriminados, sin amparo de ninguna clase, podemos sufrir nuevos atropellos.

A la comunidad Choquechambi-Carpani –continuó-- se le han adjudicado 1,675 has. de los fundos Callatomasa y Puquini, invaden, sin embargo, el fundo Muñani Chico en el que "trabajamos 453 jefes de familia entre socios y trabajadores eventuales, con una población de 1,200 habitantes."

De manera similar, Harold Rafael Chávez --gerente de la SAIS Aricoma, centro de la lucha del 19 de mayo-- luego de justificar la presencia de las tropas en las instalaciones de su empresa advirtió del desastre productivo que el "avasallamiento" de las empresas habría de significar:

> Se trata -dijo- de más de un millón de has. y de cerca de un millón de unidades ovinas. Todo un potencial ganadero muy importante para el país. Puno es un importante abastecedor de lana. La base de esto es el ganado seleccionado. ¿Qué va a ocurrir con ese ganado? ¿En manos de quién va a caer? No desprecio a los comuneros, ellos son pobres y tienen sus necesidades, pero nunca han manejado una ganadería de la forma como lo hemos hecho nosotros. Nosotros tenemos profesionales, gente de experiencia, ellos nada. En este proceso de reestructuración no se está beneficiando el campesinado pobre, este no tiene ganado y no puede entrar al área de tomas. La empresa comunal puede resultar, aunque tengo mis dudas porque la comunidad no existe en la práctica. Son grupos de parceleros acostumbrados a la propiedad privada. Va a ser muy difícil integrarlos empresarialmente.

Al final de la tarde, el viceministro aseguró a los asistentes que, en ningún caso, el gobierno accedería a las demandas de liquidación de las empresas. Que, por el contrario, una vez redimensionadas, estas recibirían el apoyo necesario para su desarrollo. El 24 de junio -"día del campesino"-, más aún, se daría por concluido el proceso reestructurador procediéndose a la entrega de títulos de propiedad a las empresas que todavía no contaban con ellos.

En tales circunstancias, los asesores de la FDCP decidieron programar una nueva oleada de tomas para el mismo 24 de junio cuyos objetivo era: (1) convertir las "marchas en tomas," es decir, pasar ha ocupar directamente la tierra “señalizada” en la movilización anterior; (2) ocupar tierras

fraudulentamente adjudicadas a "comunidades en formación" ficticias; (3) fortalecer o establecer federaciones distritales que refuercen la capacidad de la FDCP de dar conducción local a los procesos de desmantelamiento de la propiedad asociativa; (4) avanzar en la ocupación -- estableciendo pactos entre comuneros y feudatarios-- de empresas que --como las SAIS Makaya, San José e Illary-- estaban "sin mando gerencial" y al borde de la liquidación; (5) expandir la oleada de tomas a la zona sur del departamento y (6) avanzar, "en la medida de lo posible" en la toma de las propiedades de autoridades como: el jefe de la Región Agraria XXI y los directores de Reforma Agraria y CORPUNO.[36]

2.17.4. La aplicación del pensamiento Gonzalo

Sorpresivamente del "virtual autismo" con que venía actuando el PCP-SL pasó al "desesperado esfuerzo por explicar sus propuestas."[37] Respondía así a las nuevas condiciones en que se desenvolvía su alzamiento: su expansión fuera del escenario ayacuchano, la entrada a zonas nuevas con cuadros procedentes de otras regiones, la necesidad de dar coherencia a una lucha cada vez más descentralizada así como la creciente competencia con otras fuerzas políticas como el PUM en Puno. A través de referencias a las acciones pumistas en documentos partidarios o en artículos publicados en "El Diario," la dirección del PCP-SL dio inicio a una suerte de polémica no declarada con los antiguos "vanguardistas."

Tres temas sobresaldrían en este hipotético intercambio: (1) "política agraria;" (2) la naturaleza del partido y (3) la construcción del "nuevo poder."

Con respecto al primer punto, el tema central era la crítica que el PCP-SL hacía del enfoque gremialista del PUM y sobre todo a su recurso a la táctica de tomas de tierra. En el altiplano, sostenía Guzmán, la rebelión campesina no podía detenerse. En circunstancias en que los campesinos tomaban la tierra por decisión propia, no obstante, la CCP se interponía como instancia negociadora. Ellos --continuaba el argumento-- están buscando arreglos, en tanto que las masas "por si solas, pueden pasar a realizar las acciones que les ha enseñado el partido." [38]

Sin lucha armada las tomas de tierras, simplemente, derivaban "en evolución dentro de las leyes agrarias." Invasiones, cosechas colectivas, repartos de ganado, confiscación de terrenos -- "apuntando a la propiedad asociativa y conjurando la no asociativa"-- todo "bajo la dirección del partido" y "estableciendo bases de apoyo con lucha armada" eran la única garantía de triunfo.[39] La tierra -señalaría a inicios del 86 el líder maoísta- "la defienden los campesinos, no nosotros." Son ellos:

---

[36] Anónimo, "Conclusiones de las tomas del 19 de mayo y directivas para el 24 de junio."
[37] Raúl Wiener, editor, Guerra e Ideología (Debate entre el PUM y el PCP-SL), Lima: Ediciones Amauta, 1990, 9.
[38] PCP, "Reunión Nacional de Dirigentes y Cuadros." Abril 7, 1986. AGC
[39] "Conclusiones del proceso de la lucha armada." Marzo,1984, AGC.

> ...quienes tienen que aprender que la tierra se conquista con las armas y que con las armas se defiende [...] En esta línea tenemos que poner a miles de campesinos y que los demás vean lo que hacemos para que también lo hagan ellos. Con energía endiablada tenemos que organizar y organizar todo lo que podamos.[40]

Algunas semanas después, el PCP-SL reclamaría para sí la conducción real del movimiento altiplánico:

> En el sur, sobretodo en el convulsionado Puno, se han llevado adelante asaltos a puestos policiales como el de San Antón, toma de pueblos como en San José y Chupa, arrasamientos y sabotajes a SAIS, así como la invasión armada de tierras movilizando a 10,000 campesinos contra las EEAA que concentran inmensamente la tierra en su poder, lo cual ha llevado a las FFPP a declarar zonas rojas a las provincias de San Román, Azángaro, Melgar y que crezca el clamor reaccionario pidiendo se declare el estado de emergencia e intervengan las FFAA; así la miseria, las catástrofes naturales y la acción armada están haciendo de Puno un volcán altamente explosivo.[41]

A mediados de 1988, Guzmán reiteró el tema en la llamada "entrevista del siglo." "Somos nosotros -afirmó- los que empezamos las invasiones de tierras en Puno mientras que el PUM discutía con el APRA sobre cómo hacerlo." Más que conducir un movimiento de ruptura -sostendría el líder senderista- el APRA y el PUM se habían dado la mano para "bajar la presión de las aguas" en tanto que "la simple consecusión de la tierra" desligada de "una lucha por la conquista del poder" lo único que generaba era "un mayor acoplamiento al sistema." En Puno, por lo tanto, el PUM había reeditado "lo que hicieron el 74 cuando eran VR": negociar, tranzar, liquidar el movimiento. "Hagan acto de contrición -les demandaba Guzmán- y vean si no han servido incluso delatando para que sean golpeadas nuestras fuerzas."[42]

Sin embargo, -reconocía Guzmán- lo hecho en Puno por el PUM demostraba el nivel de "explosividad de las masas" en esa región del país.[43] Demostraba, más aún, cuán importante era no descuidar las reivindicaciones de la población. "Se nos imputa no tener línea específica para la lucha económica y política de las masas," afirmó, pero no es así, lo que sucede es que tenemos otra manera - "contraria a la oportunista y revisionista, nueva y distinta a la tradicional"- de acoger las demandas concretas de la población. "Desarrollar la lucha reivindicativa en función del Poder" ese era, según el PCP-SL, "el principio político inconmovible del trabajo de masas."[44] Tal era la distinción última entre el campesinismo pumista y la "guerra popular": la mera agitación sin perspectiva revolucionaria versus la construcción del "nuevo poder."

"Descoyuntar al poder gamonal" tomando al "trabajo campesino como base" y al "trabajo militar como guía." Así definía Abimael Guzmán el trabajo de su organización en el campo.[45] Tal

---

[40] "Intervención de la dirección" en Ibid. 04.
[41] "Desarrollar la guerra popular sirviendo a la revolución mundial" (agosto de 1986) en L. Arce Borja, Guerra Popular en el Perú, pp. 217-3 04.
[42] "Entrevista del siglo," p. 37.
[43] PCP, "Tercera sesión preparatoria del Primer Congreso" (Primera parte). Enero 1988.
[44] "Bases de Discusión," p. 387.
[45] "Conclusiones del proceso de la lucha armada"

objetivo implicaba "ir a lo hondo y profundo de las masas" y buscar levantarlas contra esa "costra" dirigencial "que sirve a la reacción."[46] La acción de sus columnas generaría una polarización de los conflictos locales que iría socavando el edificio organizativo que el revisionismo había levantado con el fin de "aherrojar" a las masas para desviarlas de su camino de rebeldía. Los "paros armados" eran, en tal sentido, el instrumento más adecuado para traerse abajo dicha organización revisionista ya que estos, aparte de enfrentar al Estado, cuestionaban los Frentes de Defensa de los Intereses del Pueblo (FEDIP) y otras "formas gremiales y asociativas caducas" que "la reacción necesita como patitas para apoyarse, y el revisionismo y el oportunismo para cabalgar sobre las masas."[47]

La creación de Comités Populares Abiertos era el objetivo hacia el cual el PCP-SL debía orientarse promediando el año 1988.[48] Hacerlo requería apurar el paso, dejar la "defensa pasiva," prestando "cada vez mayor atención a golpear autoridades. Es bueno. Se acerca al medio centenar de alcaldes aniquilados. En Vietnam del Sur se aniquiló trece mil autoridades para generar vacío de poder."[49] Para ser efectivos, sin embargo, los aniquilamientos selectivos debían ser adecuadamente preparados. Debía escogerse a "los más recalcitrantes y odiados;" "cuanto más cargo y nivel tengan mejor." Los alcaldes, jueces, y "toda la variopinta de gamonales" no eran, a fin de cuentas, sino "felipillos locales," quiénes: "aunque con tez y apariencia de humildes campesinos, sirvieron y sirven a los explotadores y traicionan a su clase; lo hicieron en la época de la Conquista y lo hacen ahora en la República. Estos felipillos ya están condenados por el pueblo."[50]

Al respecto, los documentos senderistas aconsejaban no cometer el error de creer que la masa entendería espontáneamente estas verdades históricas. Los aniquilamientos, por lo tanto, debían ser explicados con el mayor cuidado. No hacerlo producía graves malentendidos. De ello un buen ejemplo era lo ocurrido con el dirigente textil pumista Enrique Castilla, asesinado por un comando senderista en las afueras de Lima a fines de octubre de 1989:

> En el caso del vendeobrero del PUM, el problema que se presentó fue ejecutarlo sin haberlo desenmascarado ante el proletariado y el pueblo; debieron difundirse todas sus maldades, cómo traicionaba las luchas, cómo se vendía a la empresa, cómo suspendía el congreso textil cada vez que nosotros actuábamos, revelando temor al debate y delatándonos como 'infiltrados.' Si todo esto no se difunde, si no se hace campaña para desenmascararlo, entonces la masa no conoce sino un solo aspecto y tergiversado de su comportamiento.[51]

Frente a la impotencia pumista y el fracaso del "trapecio andino" aprista, en medio de lo que se comenzaba a denominar como "la más profunda crisis del país desde la Guerra del Pacífico," el PCP-SL podía reclamar haber convertido a la sierra en su conjunto en el "gran teatro de la guerra

---

[46] "Bases de Discusión," p. 387.
[47] "Tercera sesión preparatoria del Primer Congreso" (Primera parte), p. 16
[48] Véase al respecto, "Los Comités Populares Abiertos: En una base guerrillera. Reportaje a Mando Político" en *El Diario Internacional* no. 11, Bruselas, febrero de 1992, pp. 10-12.
[49] Ibid., p. 5.
[50] *Causa Proletaria* 5, s/f. AGG.
[51] PCP, "Sobre el balance de la aplicación de la primera campaña del plan para impulsar el desarrollo de las bases de apoyo." Febrero 1990.

popular."[52] Como aseveraría la dirección senderista algunos años más tarde: "queda claro que estamos desenvolviéndonos en la Sierra del país," en el área que había sido "históricamente," el "eje de vertebración" del país, donde "cuando los incas, en la guerra con Chile fue la parte que más se defendió y es donde pueden replegarse fuerzas ante un ataque extranjero."[53]

1986, como ya se ha explicado, fue un punto de quiebre en la intensidad de la "guerra popular" en el norte del altiplano. Sistemáticamente las principales empresas del área son objeto de "arrasamientos." Al incendio de las instalaciones prosigue el saqueo y el robo de ganado habitualmente. Son grupos pequeños los que actúan. En otras ocasiones, como en los asaltos a la SAIS Macaya en marzo o a la ERPS Kunurana en junio, decenas de pobladores son convocados a participar.

No es fácil saber con exactitud el mensaje que los cuadros senderistas portan. En todas partes se refieren, por supuesto, al problema de la tierra. En los fundos Altagracia y San Miguel de la SAIS San José -según un testimonio- prometen "asesorar en diversos problemas, incluso técnicos." En otra incursión anunciarían "estar organizando una fuerza de base del ejército popular, una organización que salga del pueblo, que no pertenezca ni al APRA ni a IU," cuyo objetivo será saldar, definitivamente, el problema de la tierra.

Imparten, asimismo, una justicia cruda y elemental: ajustician abigeos, amonestan a choferes abusivos, conminan a profesores a cumplir sus labores con responsabilidad. Los policías que actúan contra el pueblo son los que llevan la peor parte. Afirman -en diversas oportunidades- no tener nada contra la Iglesia, que ya más adelante "vendrá la lucha ideológica." "No son ustedes sino el Estado -habría manifestado un cuadro senderista a un sacerdote local- nuestro enemigo principal." Impresiona también su dinamismo y movilidad en un extenso territorio. Manejan al detalle el movimiento de vehículos cuya captura les permite breves e intensas campañas al cabo de las cuales los integrantes de la columna armada se camuflan en los barrios juliaqueños o puneños.

La toma de pueblos y el ajusticiamiento de autoridades complementa el "arrasamiento" empresarial. La toma de Chupa, por ejemplo, que Guzmán exhibirá en su documento de agosto de 1986 como prueba de la primacía de su partido en el altiplano. Son 20 individuos los que entran a esa localidad el 16 de febrero de 1986. Las principales autoridades del pueblo son de inmediato capturadas, las tiendas principales saqueadas, los víveres que almacenan repartidos. Comienza el "juicio popular" y el infortunado gobernador es el primero en caer, la población ruega a los senderistas que paren la matanza, a lo cual acceden. La advertencia ha sido hecha y todas las autoridades de Chupa renunciarán poco después.

Los 2 asesinatos de 1985 habrán de convertirse en 32 al año siguiente. Entre mayo y junio de 1986 y, nuevamente, en diciembre y enero del año siguiente se producen operativos policiales que suscitan múltiples protestas. Debido a que la participación de varios profesores en acciones

[52] *El Diario*, Julio 24, 1988, p. 27.
[53] PCP, Comité Central, "!Elecciones no¡ ¡Guerra Popular Si¡ Balance y Perspectiva de la Guerra Popular en el Perú" (1990), *El Diario*, Febrero 8, 1991, p. 4.

subversivas es ya un hecho comprobado, escuelas y personal docente son blancos habituales de la acción represiva. Los memoriales denunciando robos, vejámenes, detenciones injustificadas, se acumulan en los archivos del CODEH-Puno y las Vicarías de la Solidaridad. A comienzos de enero, la noticia de que una lista de supuestos colaboradores ha caído en manos de la policía, acrecienta el miedo a la presencia subversiva. 37 personas son detenidas en Asillo entre el 14 y el 16 de ese mes. El 21 de enero, la asamblea de alcaldes distritales de la provincia de Azángaro se pronuncia: "...las fuerzas combinadas de seguridad del Ejército, PIP, GC y GR, desarrollan acciones de violencia deteniendo en las carreteras y comunidades campesinas en forma discriminada. Como autoridades, hemos recibido las quejas de los agraviados quienes manifiestan que sufren maltratos, despojos de enseres e inclusive dinero en efectivo."

Los datos revelados por la población permiten a la policía reconstruir el andamiaje de células y bases de apoyo. Los integrantes de la "fuerza principal" -veteranos de otras regiones, y con más de un ingreso a prisión, en su mayoría- son rápidamente identificados.

El 15 de diciembre tuvo lugar una incursión a la mina San Rafael en el distrito de Antauta, Carabaya. Unos 800 millones de intis y más de 200 cajas de dinamita fueron sustraídos. Un médico y dos ingenieros son asesinados. Es el mayor robo de explosivos ocurrido en la región. Un par de días después, en la localidad de Chacocunca, dos de los atacantes son intervenidos por la policía en una acción de rutina. Se les encuentra una ametralladora, bombas caseras y municiones. Son obligados a revelar el paradero de sus cómplices. Se produce un enfrentamiento y dos policías quedan heridos, mientras una miembro de la "fuerza local" es muerta y los otros son apresados, pero la "fuerza principal" completa logra abrirse paso a balazos.

Las declaraciones de los detenidos proporcionan algunas pistas sobre la composición de la fuerza guerrillera senderista.[54] Son seis hombres y una mujer, todos ellos oriundos de Puno.

Luego que realizan los ataques al Municipio de Chupas y a la SAIS Illary, donde mueren los guardias Fuentes y Sulluca. En todas estas acciones los miembros de la "fuerza local" actúan como personal de apoyo.

"Teófilo" es un agricultor de veinte años. Afirma ser miembro del PCP-SL desde julio de 1986 en que participa en el ataque contra una EEAA azangarina: "Posteriormente -continúa- me retiré de las acciones subversivas por motivos de trabajo ya que tenía que realizar gestiones con el Banco Agrario sobre préstamos de dinero para labrar mis tierras ubicadas en la comunidad de San Miguel (Asillo)."

No es sino hasta el mes de noviembre en que "Rubén" lo recluta nuevamente -"bajo amenazas" según su declaración- con el fin de atacar la SAIS Illary. Con respecto a las muertes ahí ocurridas, "Teófilo" afirma que "los autores de tales hechos han sido los de la fuerza principal ya que yo siempre iba más atrás, con los demás compañeros, cuidando las espaldas." Como "Pedro" en

[54] La información que prosigue ha sido tomada de copias de atestados policiales depositadas en el archivo del Comité de Derechos Humanos de Puno (CODEH-Puno)

el ataque a la mina de San Rafael recibe granadas caseras "para que las utilizara en caso de que vengan extraños, ubicándome fuera de la mina." Los dirigentes "fueron los que entraron a la mina y después de un rato me llamaron para cargar las cajas de dinamita."

Como en los casos anteriores, "Alberto" (21 años), "Juana" (16) -estudiante de primero de secundaria- y "Esteban" (13), de la localidad de Curayllo, Azángaro, reconocen haber actuado bajo amenazas, en el asalto de la mina San Rafael. Una foto de estos últimos tomada al momento de su detención muestra a dos jovencitos atemorizados. "Juana" -con polleras y descalza- parece estar a punto de llorar.

"Esteban" revela haber participado en siete "escuelas populares" dirigidas por "Anselmo" y "Ricardo." En una de ellas han estado presentes "toda la célula y los padres de familia de la escuela primaria de Huaraypata, habiendo asistido algo más de 40 personas." En vísperas del asalto a la mina los miembros de la "fuerza local" habían sido reunidos en Progreso, cerca de Asillo, donde uno de los "principales" les había mostrado un plano de la mina, instruyéndoles de la siguiente manera: "Por nuestro Presidente Gonzalo, saludando al PCP, su sujeción plena e incondicional, les voy a bajar la tarea de atacar la mina de San Rafael."

"Horacio" y "Pascual" -que no habían participado en esa acción- son detenidos algunos meses después. Sus declaraciones guardan coincidencia con las anteriores. De 28 años y domiciliado en la parcialidad de Urpy-Jallapisi, "Horacio" declara ser operador de tractor en el fundo San Martín, a 3 kilómetros de la ciudad de Azángaro. Su historia es la siguiente: el 2 de diciembre dos sujetos llegan al fundo en que trabaja "preguntando por el nombre de mi patrón." Al contestarles que no se encontraba indican que están ahí para pasar la noche. Minutos después, hace su aparición un grupo de 13 personas. Mientras unos duermen -manifiesta "Horacio"- "otros vigilaban por turnos los alrededores de la casa." Al día siguiente "me llamaron para matar carnero para que comieran," para luego celebrar una fiesta por el "día del onomástico del Camarada Gonzalo." No es sino hasta el día 18 en que "Horacio" vuelve a tener contacto con los subversivos. Es entonces cuando "Anselmo": "...me hizo entrega de un millón de Intis para que los guardara y si fuera posible los cambiara en dólares, ya que la policía lo estaba persiguiendo, ya que habían tenido un enfrentamiento con ellos en la comunidad de Chacocunca."

Siguiendo las instrucciones "Horacio" obtiene los dólares en un establecimiento comercial de los alrededores del mercado de Juliaca. En las semanas siguientes dos enviados de "Anselmo" llegan a solicitarle determinadas sumas de dinero. En abril, finalmente, el propio "Anselmo" retorna para recoger el dinero restante. Fue la última vez que supo de él.

Agricultor y estudiante del Instituto Superior Pedagógico de Azángaro "Pascual" reconoce haber participado por lo menos en dos acciones. Reside con sus padres en el fundo Balsapata de Azángaro. La noche del 3 de diciembre fue intervenido por dos individuos armados que le pidieron que los lleve en su moto a un lugar que resultó siendo el mencionado fundo San Martín. Ahí se encontró a un grupo que "bebía licor y bailaba": "Siendo las tres de la mañana -continúa "Pascual"-

y encontrándome en estado de ebriedad me retiré. Hago presente que cuando me encontraba con los terroristas celebrando el día del Presidente Gonzalo todos nosotros dábamos vivas a la lucha armada."

Días después "Pascual" recibe la visita de "Alfredo" quien le comunica que "todos los componentes del PCP-SL íbamos a tener una reunión en el campo y nos dirigimos a un cerro llamado Punta Sahuacasi." Tres días después, caminando de noche y ocultándose de día, llegan a Tirapata. Es entonces que "Anselmo nos dice a todos que vamos a cumplir una tarea o sea golpear el Puesto del Destacamento de la GRP." "Pascual" recibe una pistola ametralladora y dos granadas de mano. En un volquete robado, luego de ocasionar dos bajas y apoderarse de armamento, los subversivos huyen con dirección a Ayaviri. Al llegar a la ciudad sostienen un nuevo enfrentamiento con tres miembros de la GR. Herido en el ataque de Tirapata, "Juan," entretanto, agoniza en la tolva del vehículo. De ahí:

> Nos dirigimos a la comunidad de Huamanruro lugar donde llega cadáver el (c) "Juan" y con la ayuda de varias personas de la referida comunidad, enterramos al (c) "Juan" y "Anselmo" tomó la palabra y dijo que era un compañero que había luchado por los intereses del pueblo, y hoy se nos vá y comenzó a llorar, ya que dijo que ambos se conocieron cuando iniciaron la lucha armada, envolviéndolo con una frazada lo enterramos.

Luego del sepelio "nos dirigimos a la comunidad en donde nos invitaron comida y nos quedamos toda la noche" para caminar al día siguiente hasta Santa Rosa. Una vez ahí, relata "Pascual":

> ...al Anselmo le dije que me diera permiso para que me matriculara en el Instituto y me negó el permiso y al insistir, accedió a mi petición y luego me retiré hacia Azángaro y en el mes de mayo [1987] me enteré que mis compañeros habían muerto en un enfrentamiento [...] Yo no participé en el asalto a la mina de San Rafael, enterándome por información periodística de lo sucedido, presumiendo que los autores son los mismos que atacamos los puestos de la Guardia Republicana de Tirapata y Ayaviri.

Impulsada por una singular combinación de voluntarismo y tenacidad, en doce escasos meses, la columna dirigida por "Anselmo" había colocado a Puno en el mapa nacional de la violencia. Precaria y audaz, su sobrevivencia dependía, en última instancia, de la colaboración de una población que acaso la respetaba porque la temía; pero que no parece dispuesta a desistir ni de la lucha legal ni de la movilización a través de los gremios "revisionistas." Será en San Juan de Salinas donde este delicado equilibrio se rompa por primera vez.

Debido a su ubicación estratégica --como uno de los puntos que, con Asillo y San José definen el triángulo de acción guerrillera en el norte de Puno-- el control de San Juan de Salinas reviste para PCP-SL una importancia especial. Es ahí donde nació la FDCP en 1979. A mediados de 1986, Zenobio Huarsaya --fundador de la FDCP-- era uno de los colaboradores con que los insurgentes contaban en dicha población. Segundino Machaca Quispe era el otro. A mediados de

octubre Machaca es ajusticiado por “soplón”. Su cadáver es arrojado en las afueras del pueblo "con orden de que no lo toquen", su tío, Juez de paz, desobedece y corre por ello la misma suerte.

La columna había ingresado a San Juan de Salinas en varias oportunidades, incendiando la empresa municipal de la sal -el recurso económico más importante del pueblo- buscando zanjar los problemas que enfrentan a los trabajadores con el concesionario de los saladeros. La sede municipal enfrentó similar destino en dos oportunidades. La posta médica fue despojada de equipo y medicamentos. Los comerciantes del pueblo se encontraban amenazados y bajo pagos de cupos. "Anselmo" entró al pueblo en cierta ocasión "con unas 25 cabezas de ganado indicando que las maten para comerlas." La gente "no le hizo caso." La policía llegó poco después, recuperándolas. A raíz de este incidente -concluye el testimonio- varios residentes serían tildados de "soplones."[55]

Hacia fines de octubre de 1986, San Juan de Salinas era un pueblo sin autoridades ni representantes, intimidado y expuesto a las furias de policías y subversivos. Es en esas circunstancias que, en cabildo abierto, los vecinos piden a Zenobio Huarsaya lanzar su postulación a la alcaldía. Huarsaya obtiene 303 de los 552 votos emitidos. Los "ayacuchanos" -afirma el testimonio- no podían permitirlo y el 8 de abril de 1987 “el hippie” enfrentó su destino. Siete hombres y dos mujeres lo arrastran de su domicilio hasta la plaza una mañana de miércoles. Su mujer y sus hijos miran desesperados: “Lo arrodillaron ante 200 personas, preguntaron si lo mataban y la gente clamó que no lo hicieran pidiendo que le den tiempo para que renunciara a lo que los terroristas indicaron que estaban en guerra y que de todas maneras Huarsaya trabajaba para el gobierno. La gente estaba enardecida."[56]

No lo suficiente como para animarse a avasallar al puñado de encapuchados --solo uno tenía la cara destapada-- que conducían a Huarsaya a su fin. La venganza vendrá más tarde bajo la forma de una colaboración con la policía. Días después del crimen, en efecto, la columna armada comandada por “Anselmo” es diezmada cerca de San Juan de Salinas, los que sobreviven huyen hacia el Cusco.

2.17.5. Lucha Armada versus Tercera Vía

Los acontecimientos puneños de abril/mayo de 1987 eran motivo de optimismo para aquellos que seguían creyendo en una "tercera vía." Al demostrar que un sólido movimiento social podía ser capaz de contener la polarización, el norte puneño aparecía como modelo de pacificación sin “militarización.” Según el Instituto de Defensa Legal, en Puno, "como quizá en ningún otro lugar del país, se configura un tipo de sociedad civil en la que convergen una importante organización campesina, partidos de izquierda de significativa influencia en la vida gremial, una Iglesia con fuerte asentamiento campesino, ONGs legitimadas y con propuestas de desarrollo para la región y

[55] Guardia Civil del Perú, Jefatura Provincial de San Román, “Atestado 21-SSE-JP”
[56] Ibid.

organismos de DDHH con cierto nivel de desarrollo. Todo ello había convertido a Puno en un referente nacional, de una forma relativamente exitosa de enfrentar el problema de la violencia, no basada principalmente en la represión y en el contraterror, sino asentada en la movilización y la organización de la población". En Puno --aseveró el diputado pumista Alberto Quintanilla Chacón— el PCP-SL "ha sido derrotado política y militarmente, pueden reconstituirse, pero no podrán afirmarse en esta tierra que ya los ha rechazado."[57]

En lo inmediato, la contención del PCP-SL podía permitir: (1) un fortalecimiento de la FDCP a nivel local: canalizando el espíritu combativo desplegado durante las tomas de tierras del 19 de mayo hacia la creación de organismos que --como las federaciones de Aricoma o San Antón-- centralizaran las luchas de un conjunto de comunidades en una determinada extensión territorial y (2) consolidar a la FDCP como portavoz indiscutido del movimiento campesino departamental. De obtener para los campesinos la titulación de la tierra tomada --observó un trabajador del IER Waqrani-- "las federaciones crecerían como la espuma."[58] De ser así, quizás el PUM podría llegar a ser para la sierra sur, lo que el APRA para la costa norte: la fuerza hegemónica, el gran agente de reivindicación social y cambio político.

Acaso conociendo las debilidades del movimiento encabezado por el PUM el gobierno no mostraba mayor interés en cumplir con los acuerdos pactados en el diálogo entre el Ministro de Agricultura y la FDCP. Un mes y medio después ninguno de los puntos acordados había sido cumplido.[59] Solo en septiembre la Región Agraria XXI fue finalmente reorganizada. Con su nuevo director, la FDCP pactó un nuevo acuerdo. Se estipularon medidas para poner en funcionamiento la "comisión paritaria" --sin gerentes y con participación de feudatarios y comunidades-- acordada cuatro meses atrás. Desconociendo acuerdos previos, sin embargo, no se le reconocía "capacidad resolutiva." Se limitaría a "tratar los problemas irresueltos referentes al proceso de reestructuración."[60]

El problema de fondo, no obstante, seguía en pie: el gobierno pretendía dar por concluida la reestructuración de las EEAA habiendo repartido menos de la mitad de las 1'100,000 has. prometidas; negándose, de otro lado, a titular otras 364,000 has. tomadas directamente por los campesinos del 19 de mayo en adelante. Desafiante, en el mes de octubre, la FDCP anunció que estas últimas serían tituladas por el propio gremio campesino.

El gremio y las autoridades llegaron a nuevos acuerdos que serían, nuevamente, mayormente incumplidos. La "guerra de comunicados" continuaría por varios meses más. De hecho, se produjeron nuevas movilizaciones. La del 24 de junio, por ejemplo, que transfirió a las comunidades varios miles de hectáreas más o la toma de la central Moro que abrió paso a la liquidación de la SAIS Buenavista. Pero, la FDCP tenía un papel cada vez menor. Fueron tres

[57] *La República*, Julio 26, 19987, p. 19.
[58] Entrevista con Fortunato Alegría. Ayaviri, Mayo 14, 1987.
[59] FDCP, "Nuevo plan aprista: Cerrar la reestructuración y reprimir al campesinado" en *La República,* Julio 24, 1987.
[60] "CCP, "Puno: un paso adelante en la lucha por la tierra y la paz" en *La Voz,* Abril 10, 1987.

oleadas de tomas las que se produjeron entre 1985 y 1987 recordaría Alberto Quintanilla Chacón años después. De ellas, la primera --Kunurana, diciembre de 1985-- había sido bien organizada. La siguiente --19 de mayo de 1987-- "no tuvo el mismo nivel de preparación, fue en realidad, un desborde."[61] Menos planificada todavía fue la tercera oleada de junio/julio ocurrida cuando las empresas habían recobrado algo de iniciativa.

En julio de 1989, de visita en Puno, el Ministro del Interior planteó la posibilidad de armar a los feudatarios convirtiendo a las EEAA en una suerte de bases contrasubversivas. Objetada por "diversas instituciones y personalidades," la propuesta fue dejada de lado. Este hecho, sumado a las incursiones de la recientemente creada Unidad Táctica Antisubversiva (UTA) contra las comunidades "conflictivas," complicaba la posibilidad de fortalecer a las federaciones locales como la federación del distrito de Aricoma (FUCA), provincia de Carabaya, que resultaría, una vez más, poco menos que paradigmático.

A fines de septiembre, cinco asistentes a un "cursillo de fertilización y siembra de papas" organizado por esa federación en la localidad de Crucero son detenidos por la policía que, "a patadas y culatazos y sin ninguna explicación" los conduce en una camioneta de la empresa Aricoma "a los calabozos de la Central Cayacachi."[62] Como había ocurrido en mayo, al día siguiente, 250 "delegados de las comunidades" se dirigen a ese lugar --sede de la SAIS Aricoma-- con el fin de demandar la libertad de los detenidos. De pronto:

> ...nos alcanzaron los policías de la Central Cayacachi en número de 20, acompañados de civiles, soltando balas a diestra y siniestra, hiriéndonos a 7 comuneros de gravedad en diferentes partes del cuerpo, contra todos nosotros indefensos, sin armas de ninguna naturaleza, cuando íbamos a conversar y hacer nuestros reclamos, en forma tranquila y pacífica.

En las horas que prosiguen al choque --según sostiene el testimonio de Porfirio Suni, su secretario general-- las comunidades de Usicayos y Coaza son intervenidas por las "fuerzas del orden," las que:

> ...quemaron ropas, chozas, salón comunal, llevándose sogas, *llikllas*, frazadas, radiograbadoras, dinero, relojes, gallinas y diciéndonos que los vamos a matar haciendo parrilladas y que Alan nos manda que estemos contra el campesino, golpeando a las mujeres como les venía en gana y a algunos varones les han metido guano de caballo a la boca diciendo hablen ahora.[63]

La violencia policial se había convertido en un problema endémico. "Sin ruidos ni grandes despliegues" --observó la Vicaría de la Solidaridad-- Puno se militariza": "Llegan a los pueblos y levantan su cuartel en locales comunales o en centros de servicio como centros de salud o escuelas.

---

[61] Entrevista con Alberto Quintanilla Chacón, Agosto 12, 1992.
[62] FUCA, "Sucesos ocurridos los días 24 y 25 de septiembre en Crucero-Carabaya," 25-9-1987. Las citas que prosiguen provienen de este documento.
[63] Ibid.

Nadie protesta, ni denuncia, ni condena. Se van aceptando las cosas así, por miedo a los unos y a los otros. Imponiéndose, poco a poco, la ley del terror, de la resignación y de la muerte."[64]

El 30 de marzo de 1988, finalmente, el gobierno anunció la conclusión del proceso de restructuración. La "fase de transferencia de tierra" quedaba "definitivamente" cerrada. A partir de entonces, la tierra "en poder de las empresas reestructuradas" adquiría la condición de "intangible."[65]

Cinco semanas después --al cabo de casi un año de silencio tras el aniquilamiento de su columna en Cututuni, Azángaro—el PCP-SL reaparecía en el norte del departamento con un devastador ataque al puesto policial de Crucero. Seis efectivos y el juez de paz de la localidad fueron victimados en la acción. "No está confirmado --informó la Vicaría de la Solidaridad de Puno-- si sus cuerpos fueron quemados antes o después de muertos."[66] A continuación, los subversivos se apoderaron de dos camionetas de la Misión Luterana a bordo de las cuáles se dirigieron a la central Cambría de la SAIS Picotani "donde causan destrozos en un camión, volquete, almacén, oficinas y otras instalaciones." El 19 de mayo, finalmente, entran al fundo Caluyo de la SAIS Cerro Grande --en la frontera de las provincias de Azángaro y Huancané-- donde causan similar destrucción y realizan "repartos de ganado ovino y vacuno a las comunidades campesinas cercanas al fundo." Un mes después, Jaime Centeno Jove, sucesor de Zenobio Huarsaya en la alcaldía de San Juan de Salinas, es asesinado en la plaza principal de la ciudad de Azángaro.

Inmediatamente después del ataque al puesto de Crucero, policías de la Central Cayacachi detienen a Porfirio Suni --secretario general de la FUCA-- quien, esa misma noche, "con violencia y malos tratos es conducido a Ayaviri en el mismo camión que transportaba los cadáveres de los policías muertos el día anterior." Bajo tortura, Suni declara de manera forzada haber colaborado en el ataque al puesto policial, implicando, asimismo, al párroco de Crucero, Bertho Muriel Pino.

En las semanas siguientes, la UTA realiza un operativo de rastrillaje en las provincias de Melgar, Ayaviri y Azángaro. Dirigentes gremiales como Julián Paucar y Timoteo Huanaco Manani de la federación distrital de Santa Rosa; líderes comunales como Martina Tapara Quispe y Evaristo German Huaytara de Ñuñoa, Melgar, asi como misioneros laicos y animadores cristianos como Brígida Chevallay y Vladimiro Sotomayor Estrada son objeto de la acción represiva. "Banderolas usadas en marchas, folletos sobre la reestructuración, libros de lectura popular" y propaganda del

---

[64] "¿Qué pasa en Puno? Mensaje de la Vicaría de la Solidaridad," Septiembre-Octubre, 1987. En AVSP pueden encontrarse numerosos testimonios de denuncias de abusos policiales como, por ejemplo, los ocurridos en Fiestas Patrias de 1987 en la comunidad de Kenamari Bajo y Llali en la provincia de Melgar; el asesinato de la niña Juana Choque Miranda, el 5 de octubre del mismo año, por un policía en estado de ebriedad del puesto de Arapa, y la muerte del joven Juan Gutérrez Mamani, en un baile social realizado en Pucará, a manos de un miembro de la Guardia Civil también en estado de ebriedad.

[65] Ministerio de Agricultura, "Comunicado A los Productores Agrarios de Puno" en *La República*, Abril 2, 1988.

[66] A menos que se indique lo contrario, la información que a continuación se incluye procede de la cronología sobre la violencia en Puno preparada por la Vicaría de la Solidaridad de Puno.

PUM (en los casos de Páucar y Huanaco) son exhibidos como "pruebas" de sus vínculos con la subversión.

La conexión entre el PCP-SL y el PUM es la tesis que la CENECAMP intenta reafirmar aprovechando la coincidencia de la reaparición senderista con la publicación de un polémico artículo de Ricardo Letts, en el cual, según la CENECAMP, el dirigente pumista proponía la necesidad de integrar la lucha legal de los partidos revolucionarios (PUM); el accionar legal e ilegal del movimiento campesino (CCP) y la guerra que desarrollan los grupos alzados en armas (PCP-SL y MRTA).[67] Lo que el "desclasado latifundista Letts" y su "movimiento capitaneado por rabiosos burgueses miraflorinos entre los cuales no hay un solo campesino auténtico" pretende -- sostiene la CENECAMP-- es destruir las "empresas socializadas" para reemplazarlas por "minifundios individuales en los que es imposible aplicar cualquier forma de organización socialista y producción tecnificada."[68]

La violencia, sin embargo, no es solo verbal. En junio, Marcial Couderc, párroco de Ayaviri, es detenido por feudatarios de la ERPS Sora cerca de la localidad de Macarí. Tildado de "cura extranjero agitador de comuneros," Couderc es retenido por varias horas para luego ser canjeado por un grupo de feudatarios que, a su vez, había sido apresado por comuneros de la zona.[69] Casas parroquiales son allanadas por la policía. El propio alcalde de Puno encabeza una implacable campaña denunciando la alianza de los "curas extranjeros" con la subversión. Se sabe, además que el Ejército los mira con considerable sospecha.[70] La iglesia puneña se encuentra a la defensiva. La prelatura de Ayaviri se ve obligada a demostrar que las acusaciones que vinculan al párroco Muriel con el asalto al puesto policial son absurdas.[71]

Con relativa frecuencia los representantes de la Iglesia deben acudir a los despachos de la autoridad militar con el fin de esclarecer sospechas o demandar sanción para los abusos que el personal policial comete. Para evitar confusiones riesgosas, la Vicaría de la Solidaridad acordará que, aunque seguirá preocupándose por "la vida e integridad" de **todos** los detenidos, no defenderá a "los comprometidos o integrantes de grupos terroristas" en los juicios propiamente dichos.[72]

Mientras tanto el PCP-SL actúa con eficiencia. El 30 de junio, interrumpiendo su participación en acciones rurales, "David" y "Silver" "bajan" a la ciudad de Puno con el fin de perpetrar el "aniquilamiento" del alcalde Luis Dueñas. Un par de días después, el Obispo de Puno celebra una misa por el eterno descanso de quien, durante sus últimos dos años de vida, se había dedicado a satanizar a los curas progresistas. Dos días después del funeral, la antena de Radio Onda Azul, de propiedad del Obispado, era inutilizada mediante el uso de un artefacto explosivo. Hubo

[67] Se refiere al artículo "La Trenza" en *La República*, Junio 8, 1988.
[68] CENECAMP, "Basta de agresiones y calumnias contra el campesinado puneño" en *La República*, Septiembre 9, 1988.
[69] "Testimonio del P. Marcial Couderc, Párroco de Ayaviri, sobre los hechos ocurridos en Sora," Junio 25, 1987, en AVSP.
[70] DIGIMIN, "Apreciaición general por área y establecimiento de la subversión." Lima 1987.
[71] "Comunicado de la Prelatura de Ayaviri." Ayaviri, Junio 19, 1988.
[72] "Reunión de Vicarías de Solidaridad de los días 19 y 20 de diciembre de 1988" en AVSP.

consenso en atribuir al Comando Rodrigo Franco la autoría del ataque. Del asalto al puesto de Crucero al asesinato del alcalde Dueñas, en tan solo tres meses, la frágil paz de 1987 había estallado en pedazos.

Para el PCP-SL la acción de Crucero conlleva un mensaje contundente: (a) reiterar su presencia en Puno llevando la "guerra popular" ahí donde la masa había sido más agredida y mostrado mayor combatividad; (b) contraponer a la futilidad de la negociación la efectividad de la lucha armada, evidenciando la ausencia de dirección política pumista "abajo," en el nivel en que la lucha por la tierra y el acoso policial eran hechos de la vida cotidiana, ese era el objetivo (c) enmendar un grave error: el hecho que, si bien a partir del año 82 ellos habían encabezado la liquidación de las empresas no habían hecho lo suficiente para aprovechar políticamente un indudable éxito militar. Así, con toda la importancia que Puno tenía dentro de la marcha de la "guerra popular" el trabajo ahí adolecía de serias debilidades:

Rubén Muelle Góngora, "Lino," --integrante de la Primera Compañia del PCP-SL, veterano del ataque a la Cárcel de Ayacucho de marzo de 1982-- había sido el designado para recomponer la "fuerza principal" del norte altiplánico a inicios de 1988. Había fugado de la cárcel de Puno en diciembre del 87. En las provincias altas del Cusco se reúne con los sobrevivientes de la columna de "Anselmo." Son ocho efectivos cuando retornan a Puno que luego de un par de acciones menores en el área de Melgar comienzan en Crucero una campaña que --después del aniquilamiento del alcalde Dueñas-- continúa con acciones contra elementos policiales, en la SAIS Sollocota y en Ayaviri, y las tomas de Paratía y Calapuja hacia fines de año.

Es la fase preparatoria de un Plan Estratégico Operativo (PEO) que, busca ampliar el "ámbito" de acción de la columna, "desperdigar" al enemigo, abriéndole varios frentes, obligándolo a "asentarse pasivamente."[73] En términos senderistas, el objetivo es "especificar la base de apoyo, la red territorial y la red móvil," restableciendo contactos y determinando "líneas de movimiento."[74] Efectuando, en suma, el mejor "reconocimiento" posible puesto que, como ha manifestado la dirección, "sin un buen reconocimiento no hay plan porque es el punto de partida. De otra manera, sería como entrar en una casa a ciegas. No conviene."[75]

A "Adrían", nuevo jefe del Comando Regional del Sur le corresponderá recuperar la iniciativa en Puno.[76] No sólo tendrá que vérselas con un PUM fortalecido por su papel en las tomas sino que las llamadas Unidades Tácticas Antisubversivas han dotado a las fuerzas del gobierno con mayor movilidad y poder de fuego en las áreas rurales. En noviembre, "Lino" y "David" son reconocidos en una calle de Juliaca. Logran fugar después de una breve balacera. "Adrián" ordena, poco después, que elementos de la "fuerza principal" puneña apoyen la fase preparatoria del PEO

[73] Ibid., p. 21
[74] PCP, Información sobre el plan de la Tercera Campaña (Segunda parte).
[75] PCP, "Tercera sesión preparatoria del Primer Congreso" (Primera parte)
[76] Según un reporte senderista, este comité regional consiste de tres comités zonales -Puno, Arequipa y Cuzco—que reclaman un número aproximado de 5,000, 2,000 y 3,000.

del comité zonal del Cusco. "Lino" marcha a la cabeza. Perderá la vida en un enfrentamiento en la localidad de Viluyo, en las alturas de Sicuani. Dos de sus compañeros son detenidos mientras que los sobrevivientes retornan a su base de origen. El comité cuzqueño queda desactivado. En manos del comité zonal de Puno queda, entonces, la responsabilidad de mantener viva la "guerra popular" en toda la región sur. La tarea queda en manos de un joven arequipeño de 22 años, ex-alumno del colegio jesuíta de Arequipa, Juan Carlos Olivares del Carpio "Daniel", es más conocido como "Gringo" por su complexión clara y su estatura por encima del promedio local. Sobreviviente de la columna de "Anselmo," "Daniel" asume la tarea de completar el plan iniciado por el desaparecido "Lino." Requiere, para tal efecto, reconstruir la "fuerza principal." Eran 8 al momento de atacar Crucero. Se redujeron a 5 después de la incursión en el Cusco. Para el mes de diciembre, con refuerzos llegados de Arequipa, suman no menos de 18. Herido por una esquirla de granada en el ataque al puesto de la Guardia Republicana de Calapuja, Olivares se recupera, por ese entonces, en una casa de la zona céntrica de la capital departamental a pocas cuadras de comisarías y cuarteles. Se cumple, mientras tanto, la "primera ofensiva" del PEO consistente en: acciones de agitación y propaganda; "aniquilamiento" del gobernador de Acora; "sabotaje" a la sub-prefectura de Azángaro y la Zona de Educación en Puno y una acción de "sabotaje y aniquilamiento" contra el Proyecto Pampa en las afueras de Juliaca. Recién en enero Olivares estará en condiciones de internarse en las alturas de Azángaro para dar inicio a la "primera ofensiva" del PEO.

El asalto a la mina "Los Rosales" de Lampa --el 14 de febrero de 1989-- es una de las primeras acciones encabezadas por el "Gringo" Olivares tras su recuperación. Sustraen alrededor de 200 cajas de dinamita que luego transportan a diversos puntos del departamento. Con parte del botín en las manos, tres elementos de apoyo son detenidos una semana después en las inmediaciones de Juliaca. El hecho da lugar al desmantelamiento de buena parte de la red urbana constituida en el segundo semestre del año anterior. Las declaraciones de los detenidos permiten una mirada a la dinámica interna del mecanismo subversivo.

A los 20 años, "Rosa" es una veterana de la "guerra popular." Su militancia data de 1986 en que conoce a "Adrián" cuando visitaba a un pariente en el CRAS Lurigancho. A instancias de éste se vincula a actividades con los familiares de los presos senderistas. Se involucra, en algún momento, en acciones armadas. Acusada de participar en el asesinato de Rodrigo Franco cumple condena en el CRAS Canto Grande.[77] En octubre de 1987 recobra su libertad. Durante 1988 viaja en dos oportunidades a Arequipa donde cumple tareas varias: "reglaje" del Alcalde de Socabaya, reconocimiento para un atentado contra un comandante de la PIP y ataque al Puesto GC de Porongoche y otras. A fines de año está en Puno designada para intervenir en el "aniquilamiento" - al lado de "Silver" y "Tomás"- del oficial de la Armada Peruana Juan Vega Llona, agregado naval

[77] Rodrigo Franco era un funcionario del gobierno aprista asesinado por integrantes del PCP-SL en las afueras de Lima en 1987. Al año siguiente su nombre fue adoptado por un comando paramilitar auspiciado, al parecer, por el Ministerio del Interior.

en La Paz, Bolivia. Permanece en casa de "María" entre el 27 de noviembre y 3l de diciembre. Cumplida la tarea retorna a Arequipa donde permanece hasta febrero de 1989 en que viaja a Juliaca para servir bajo las órdenes de un viejo conocido: "Adrián."

Luego de cumplir sentencia en la cárcel de Lurigancho, "Tomás" permanece por algún tiempo en Arequipa donde, al menos en dos ocasiones, es nuevamente detenido por la policía. A mediados de 1988 está en Puno como parte de la columna de "Lino." Participa en las acciones de Paratía y Calapuja, en el atentado contra el Proyecto PAMPA y en el asesinato de Vega Llona. Realiza un viaje previo a Bolivia con el fin de efectuar contactos con elementos de apoyo en ese país.

El 3 de diciembre de 1988, éstos y otros integrantes de la "red urbana" senderista se reúnen en casa de "María" para celebrar el onomástico de "Gonzalo" y despedir a quienes viajan a La Paz con el propósito de vengar a sus camaradas caídos en junio de 1986 en la prisión de El Frontón, isla frente al puerto de El Callao. Vega Llona –al mando de un escuadrón de helicópteros- había participado en el sangriento aplacamiento del motín subversivo.

"David" es otro de los veteranos del grupo. Ha pasado cuatro años en Lurigancho. A Puno llega también vía Arequipa. Se instala en Juliaca y comienza su actividad subversiva en la región con ocasión del ataque a Crucero.

Los otros detenidos son jóvenes oriundos de Puno que se han ido sumando de diversas maneras al núcleo de la casa de "María." "Laura" ha conocido a ésta última a través de su cuñada "Amalia": la reclutan para atender la herida del "Gringo" Olivares. Admite su asistencia a la fiesta del 3 de diciembre pero alega no tener mayor conexión con el PCP-SL. "Juan Carlos" --que aportará información vital para planear ataques a Radio Nacional y el Ministerio de Transportes-- se conecta a través de "Amalia" quien es "conviviente de su tío." Esta, a su vez, inicia su vinculación con el grupo cuando accede al pedido de "María" de alojar a un miembro de la "fuerza principal."

"Nélida," "Alicia" y "Juan Carlos" --cuyas edades fluctúan entre los 18 y los 21-- han conocido al "Gringo" en casa de "María" y su participación se ha limitado --según dicen-- a dar información y a colaborar en el transporte de la dinamita. "Tatiana," 22 años, se ha incorporado recién en 1988 pero ha participado ya en acciones armadas como la incursión a Paratía. Luego "se retira a Puno," donde "María" le ordena participar en un Congreso del Instituto Superior Pedagógico de Juliaca. "Manuel," un economista de la universidad de Puno, ex-empleado de CORPUNO y del proyecto Pampa, colabora en la planificación del atentado contra este último. "María," finalmente, con 21 años, es sindicada por la policía como la responsable del PCP-SL en Puno. Militaba --según declaró-- desde mayo de 1988. Su experiencia de combate se reducía al ataque al Proyecto Pampa donde fue victimado un empleado de dicha entidad.

Colocar al "trabajo militar como guía" apostando a que la autoridad que “emanaba del fusil” se tradujese en condiciones favorables para la construcción del nuevo poder era la clave del

accionar senderista. El "gringo" Olivares, en ese sentido, era un jefe capaz de sorprender a sus adversarios desplegando una capacidad militar inesperada teniendo en cuenta los limitados recursos de que disponía y los sucesivos golpes que su organización había experimentado.

Bajo su mando, la primera semana de enero de 1989, la "fuerza principal" penetra al "triángulo guerrillero" dando comienzo así a la "segunda ofensiva" del PEO. Su incursión reaviva a las masas atraídas en campañas anteriores. El ataque a San José, en la madrugada del 29 de enero, establece con claridad la decisión del PCP-SL de librar al campo de todo tipo de "felipillos." Son -- según el reporte de la Vicaría de la Solidaridad de Puno-- alrededor de 100 personas las que participan en la acción. Se reparten por el pueblo con el fin de detectar a quienes deberán ser sometidos a juicio popular. "Después de conducirlos a la plaza donde los amenazaron y cantaron sus consignas los llevaron al Consejo Municipal y siendo las 3 a.m. los ejecutaron." Entre autoridades, un dirigente de la SAIS San José y dos civiles más de filiación desconocida, son 7 los ajusticiados. Saquean, a continuación, las oficinas de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) y algunas tiendas. Se marchan dejando una advertencia a autoridades y dirigentes para que renuncien a sus cargos.

Los recuentos internos del PCP-SL revelan algunos datos de la campaña política que antecede y prosigue a la incursión en San José. Se habían realizado 13 "asambleas populares," 6 acciones de corte de carreteras, 2 acciones de sabotaje y 3 de agitación y propaganda.[78] Según otro documento, la ofensiva de enero resulta en: 13 comités populares en Azángaro, 663 personas de "masa directamente movilizada," 2,650 "indirectamente" movilizados y 142 integrantes de la "fuerza de base". A fines de febrero, la detención de varios miembros de la red urbana constituye un golpe significativo para el PCP-SL. Entre los documentos que la policía logra capturar se encuentra listas de alumnos de colegios de Juliaca y de "contactos" en la Universidad Nacional del Altiplano. La columna guerrillera se mantiene intacta pero la ausencia de apoyo efectivo en la ciudad, sin embargo, afecta inevitablemente su accionar.

En el Cuarto Congreso de la FDCP -celebrado en enero de 1989 en el distrito de Coata, provincia de Puno-- más de 1,000 delegados de todo el departamento se pronuncian en favor de una huelga campesina regional demandando reabrir la reestructuración y medidas de emergencia para el sector agropecuario. De su Segundo Congreso Nacional (junio, 1988), de otro lado, el PUM ha emergido dispuesto a disputar con PCP-SL el control del sur andino vía la constitución de organismos de autodefensa y otras medidas de preparación militar.

A fines de febrero de 1989, el PCP-SL decreta tres días de "paro armado" en Azángaro. Una serie de explosiones en diversos puntos de la capital provincial reafirman la seriedad de la convocatoria. Nada se mueve en la provincia. La vital comunicación con Juliaca queda interrumpida. Tres días después se inicia la huelga de la FDCP. Se prolonga por veintiún días. Se

[78] PCP, "Información sobre el Plan de la Tercera Campaña" (segunda parte)

producen algunas tomas de tierras, bloqueos de carreteras y marchas a la capital departamental que culminan con un paro de 48 horas convocado por el recientemente formado Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Puno. La medida concluye con la firma de una nutrida acta de compromiso formándose una "comisión mixta paritaria" encargada de supervigilar los múltiples y numerosos acuerdos.[79]

A mediados de abril la réplica senderista a la supuesta victoria del bloque FDCP-PUM comienza a tomar forma. Fuerzas locales emprenden acciones de arrasamiento y reparto de ganados en la provincia de Azángaro. Un mes después la "fuerza principal" retoma su campaña contra las autoridades locales. El 13 de mayo ataca Muñani e incursiona en el Municipio en medio de una celebración popular. Entre decenas de pobladores tendidos en el suelo los atacantes buscan infructuosamente al alcalde y al teniente-gobernador. Terminan ajusticiando al secretario del municipio y al ex-gerente de la SAIS Huayna Cápac. Queman posteriormente el Municipio, la Biblioteca Municipal y el local de ENTEL-PERU. Seis días después, mientras dirigía la reconstrucción de un puente dinamitado durante el paro armado de febrero, el alcalde de Azángaro Marcelino Pachari es abatido a balazos: “se había advertido que nadie tocara ese puente y él, embriagado, se jactó de que no le temía al partido y lo desafió”, explicaría años después un líder senderista.[80]

Al lado de su cuerpo, un letrero advierte: "Así mueren las autoridades burócratas, servidoras del viejo orden." La noche del 21 de mayo los subversivos se presentan en el local del IER "Waqrani", propiedad de la Iglesia Católica en las afueras de Ayaviri. En un par de horas destruyen las instalaciones educativas y administrativas asi como vehículos, generador, maquinaria.

En la estación experimental de la Universidad del Altiplano de Chuquibambilla se observa destrucción similar a la del IER. Solo que ahí, varios ejemplares de ganado seleccionado también ha sido aniquilada.

En Macarí el dolor se arremolina alrededor de los cuerpos del Juez César Vera y el teniente gobernador Toribio Challco, dos autoridades que, paradójicamente, habían apoyado las tomas de tierra.

Alguien despliega el letrero dejado cerca de los cuerpos: “Asi morirán los alcaldes, regidores, prefectos, gobernadores, teniente-gobernadores, funcionarios de CORDES, microregiones, proyecto Pampa y todo representante del gobierno aprista fascista.”

---

[79] CCP, "Movilización Campesina: Respuesta Democrática," pp. 36 y ss. Los acuerdos negociados con las autoridades establecían procedimientos sumamente específicos cuyo cumplimiento iba a ser muy difícil de supervigilar. Con respecto a la actividad minera en la provincia de Sandia, por ejemplo, se estipuló lo siguiente: "...inicialmente el Distrito de Yanahuaya recibirá todos los domingos desde el primer domingo de mayo una brigada de rescate de oro de la posta de Sandia, para determinar el volumen de oro producido mensualmente y posteriormente de acuerdo a lo captado establecer los precios.”

[80] Entrevista con Osmán Morote. Prisión de Yanamayo, Junio 2002.

Hasta marzo de 1986, según Ricardo Vega, el PCP-SL no había reivindicado la lucha por la tierra y lejos de enfocarse en las EEAA se había dedicado a atacar puestos policiales, a asesinar autoridades políticas y hostilizar a líderes gremiales, sin decir del tema agrario.

Fue solamente después del decreto de reestructuración en marzo de 1986 que comenzó a escucharse en Azángaro de incursiones a las empresas y en Melgar comienzó con el ataque a la central Huacauta en junio de 1986.

Luego de incursionar en Langui-Layo (Canas) en el vecino departamento del Cusco, el destacamento senderista enfila nuevamente hacia Puno. Ataca en La Raya a otras dos estaciones experimentales universitarias. El 26 de mayo, en Nuñoa asesina a dos técnicos en la ERPS Alianza. Se dirige de ahí hacia la zona de Azángaro donde, el día 29 de mayo, asesina al alcalde de Ayrampuni. "Acto seguido -relata el informe de la Vicaría- amenazaron a la población para que no recogiera el cadáver, bajo pena de muerte por lo que este permaneció botado por tres días hasta que fue recogido por una patrulla militar." En 16 días, la columna guerrillera ha recorrido 700 kilómetros, promediando un ataque diario y asesinando a 7 personas.

Nunca antes en la historia de la guerra, la Iglesia había sido blanco del PCP- SL de manera similar. Los voceros eclesiásticos aprovechan la oportunidad para marcar diferencias entre la lucha justa de los campesinos y la acción subversiva. Para recordar al país, asimismo, que su solidaridad con los primeros era acaso la mejor manera de confrontar al PCP- SL en lugares como el altiplano puneño donde la injusticia ofrecía condiciones favorables para su expansión. "Nuestra mística es mayor que la de el PCP-SL" declara el Obispo de Puno a la prensa de Lima.[81] A finales de junio, la celebración de un cuarto de siglo de fundación del IER "Waqrani" dio lugar a una amplia demostración de solidaridad y de cohesión de las fuerzas comprometidas con la "tercera vía."

Nada volvería a ser como antes, sin embargo, después de la campaña senderista de mayo de 1989.

En los meses siguientes la violencia alcanzó nuevas cotas de intensidad. A inicios de julio una emboscada a un vehículo de la SAIS Sollocota que transportaba personal policial resulta en la muerte de seis oficiales. Ocho de los atacantes son más tarde eliminados en un enfrentamiento con policías que acudieron al rescate de sus compañeros. El PCP-SL aparecía más decidido que nunca, sin embargo, a no ceder en su empeño de afirmarse en la región, alanzando en su momento de auge en casi una década de presencia en Puno. Al compás de estas acciones audaces, la fama del "Gringo" Olivares crecía a niveles míticos. "Con una mezcla de temor y respeto se habla de su frialdad para enfrentarse a la muerte. La distinción entre "senderistas buenos" y "senderistas malos" se diluye ante el comportamiento sanguinario del nuevo jefe.

[81] Entrevista con el Monseñor Jesús Mateo Calderón en *La República*, Julio 30, 1989. Véase también "No hay relación entre lucha por la tierra y el terrorismo en Puno (Obispo de Ayaviri protesta por documental de Panorama) en *La República*, Junio 2, 1989.

A mediados de año, un periodista capitalino que visita la región se hace eco de una de las muchas historias que se tejen –ficción en su mayor parte-- en torno a la columna encabezada por el "Gringo." En Huancané -asevera su reporte- los senderistas visitan las comunidades haciendo uso de un helicóptero. Se habla, además, de una posible alianza con narcotraficantes que proveen a la columna de Olivares del armamento sofisticado que explicaría su aparente superioridad militar.[82] Entre enero y julio de 1989, el PCP-SL causó 23 bajas en las fuerzas policiales y asesinó a 14 autoridades. Al menos un par de docenas más suman las víctimas no reconocidas que mueren por "robar a nombre del partido," incurrir en abigeato, "soplonaje" o deserción. Sus cuerpos son arrojados en caminos transitados como símbolos inermes del poder desafiante, apresurado y contundente que el PCP-SL está construyendo en Puno. La iglesia, las organizaciones campesinas, el conjunto del bloque regional de apoyo a la lucha por la tierra siente el impacto de la presión senderista. Las evaluaciones internas de los miembros de las vicarías comienzan a transmitir preocupación, miedo y sorpresa, esta vez en proporciones mayores a la mística y al coraje.

Ante esta situación, los integrantes de las vicarías de Ayaviri, Sicuani, Juli y Puno subrayan la "necesidad de conocer datos, proyecto y caminar de SL por la zona" y de desarrollar un "código de claves para la comunicación interna y de radios."[83] En el mes de agosto realizan una constatación angustiante: "la infiltración de SL y las FFAA en todo tipo de organización popular, principalmente juvenil." Atravesamos –concuerdan-- "por un momento difícil donde nuestro análisis debe ser mucho más claro y no debemos dejarnos confundir con informaciones falsas y especulativas."[84] Al mes siguiente se verifica un agravamiento de esta situación. Frente a la infiltración del PCP- SL --sostienen los miembros de las vicarías-- "no debemos ser ingenuos" debiendo ser particularmente cuidadosos en los casos de cursos de Derechos Humanos dictados a grupos amplios.

Se reafirma, asimismo, que se ha detectado presencia senderista en sectores juveniles, en los Institutos Pedagógicos, Tecnológicos e inclusive en movimientos cristianos así como en el SUTE y la llamada Coordinadora Clasista. Se sugiere que cada vicaría realice un "pequeño estudio sobre el SUTE y la Coordinadora Clasista," vista por muchos como organismo de fachada del PCP-SL.[85]

Evaluaciones de tono similar provienen de otros sectores del "movimiento democrático" pro-campesino. En septiembre, Santiago Aragón, militante del PUM que asume la alcaldía de Azángaro en reemplazo de Marcelino Pachari declara:

> En muchas comunidades han renunciado las autoridades por temor de ser asesinadas por SL. Azángaro era a nivel de la FDCP una de las bases más fuertes, pero en estos últimos meses se ha resquebrajado ese nivel de organización. Operamos en condiciones muy

[82] Mario Munive, "Iglesia y la IU jaquean a el PCP-SL" en *La República,* Julio 7, 1989.
[83] Acta de la reunión de Vicarías. Ayaviri, 28-29 de junio de 1989. En AVSP.
[84] Acta de la reunión de Vicarías. Ayaviri, agosto 13, 1989. En AVSP.
[85] Ibid.

difíciles, inclusive no nos permiten como antes salir a distritos ni a sitios alejados para apoyar las demandas de las comunidades. Antes desfilaban en fiestas patrias hasta 90 tenientes gobernadores, en 1989 desfilaron menos de 20. Casi las tres cuartas partes han renunciado por amenazas y el subprefecto se ha visto obligado a recibir estas denuncias sin ofrecer alternativa alguna.[86]

El PCP-SL, sin embargo, no era la única fuente de violencia en el campo; ésta provenía también de la acción represiva. A lo largo de 1989 y 1990 -aún antes de que se pusiera al norte del departamento bajo estado de emergencia en octubre de 1990- varias provincias altiplánicas vivían bajo una militarización *de facto*. Una característica de la acción represiva era su incapacidad para establecer diferencias entre las acciones legales y de fuerza de los gremios campesinos y la acción subversiva. Un informe de "inteligencia militar" de aquellos días aseveraba inequívocamente que: "... existen organismos de fachada, que en forma indirecta estarían apoyando a elementos sediciosos, tal es así los denominados 'clubes de madres', Movimiento de Obreros Clasistas y otras organizaciones gremiales y laborales y organizaciones estudiantiles existentes en Puno que son controladas por líderes identificados con la ideología y doctrina del PCP-SL".

En consecuencia, decenas de dirigentes fueron hostilizados, cuando no torturados y retenidos ilegalmente en condiciones inhumanas. En setiembre de 1990 se produjo el acontecimiento más dramático de aquella sombría ola de violencia oficial: en la comunidad de Chillutira una incursión de la DOES culminó con la desaparición de varios dirigentes comunales que aparecerán posteriormente muertos, entre ellos, Dionisio Cantani Hancco, secretario general de la federación distrital de Orurillo. A las primeras denuncias de desapariciones surgieron los temores de que Puno deviniera en "otro Ayacucho." Un factor de optimismo era que, a pesar de su relativo debilitamiento, existía en Puno una iglesia sumamente activa que a través de una red de "vicarías de la solidaridad" que con el apoyo de comités locales de derechos humanos se encargaba de seguir al detalle los sucesos ocurridos en las zonas más alejadas, estableciendo una suerte de fiscalización que, vía la denuncia rápida y amplia, ponía algunos límites a la violencia represiva que, al ahondar la desconfianza de la masa rural en las autoridades terminaba favoreciendo a la insurgencia.

El infortunado profesor de Crucero, Porfirio Suni sobrevivió para contar ante una cámara de video las torturas a que había sido sometido en el afán policial por culparlo del ataque al puesto policial de Crucero en mayo de 1988.

Como vimos, en setiembre de 1989, la FDCP conservaba todavía fuerzas para convocar a una segunda huelga campesina del sur como antesala a las elecciones municipales y regionales de noviembre. Como había ocurrido en marzo se producen bloqueos, movilizaciones y algunas tomas aisladas. Catorce días después se levantó la medida y se estableció un nuevo diálogo con las autoridades que llevó a la formación de nuevas comisiones encargadas de hacer cumplir el pliego

[86] "Azángaro en estado de emergencia no declarado" en *Sur* no. 125, septiembre 1989, p. 17.

campesino. La respuesta del PCP- SL, sin embargo, es inmediata: "golpea los mandos comunales para afirmar sus comités populares y realizar acciones de aniquilamiento". De tal suerte: "Frente a las limitaciones que tiene el partido para encarar el plan de el PCP-SL sólo nos queda la táctica del vacío y el repliegue de nuestros cuadros." Mientras la táctica pumista de "huelgas de masas" parece empantanarse, la columna armada senderista afina sus fuerzas con miras a perturbar las elecciones municipales de noviembre.

La campaña se inicia a comienzos de ese mes con una serie de ataques a autoridades locales.[87] El 13 de octubre incursionan en Muñani donde asesinan al encargado de la alcaldía, a un regidor y al secretario de la federación distrital de campesinos. Días después, una fuerza de aproximadamente cien individuos asalta el asiento minero de San Antonio de Poto. Nueve policías, un gobernador y los alcaldes de Ananea y San Juan del Oro son asesinados ahí. Solamente en Azángaro, entre el 3 y el 11 de noviembre, una veintena de personas, entre autoridades, candidatos y campesinos comunes y corrientes son asesinados por los insurgentes, en un esfuerzo por contener con sangre la voluntad de votar. El sufragio tuvo lugar al día siguiente y solamente en 5 distritos azangarinos, el PCP-SL consiguió impedir la realización de los comicios. En los otros 5, como en el resto del departamento, la votación siguió su curso con relativa normalidad.

El ataque contra autoridades locales no se detiene tras los comicios. Entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre, doce personas --miembros de IU en su mayoría-- son victimadas en distritos de Azángaro y Melgar. De candidatos y autoridades electas, la persecución se extiende a autoridades comunales. Ocurre así en la comunidad de Choquepiñas que pierde a tres de ellas además de su gobernador. Son los sucesos de Orurillo del 3 de diciembre, sin embargo, los que mayor indignación provocarían en el núcleo pumista de Melgar y entre los activistas de la FUCAM.

> La noche del 3 de diciembre -según un informe- una columna ingresó a Orurillo, en las alturas de Melgar, y asesinó a ocho personas, entre las cuales estaba el alcalde electo de IU Tomás Quispesayhua, secretario general de la federación campesina distrital; Godofredo Marrón, secretario general del SUTEP; Pedro Pablo Tito Limache, profesor primario; Julio Céspedes, director del Colegio Agropecuario; Víctor Quispesayhua, gobernador; Nicolás Cahuata, juez de paz; Mario Lizardo Lopez Quispe, campesino; Benito Isidro Mamani Condori, chofer. Luego de la matanza, los senderistas dinamitaron el municipio, la posta médica y prendieron fuego a las viviendas de sus víctimas.[88]

Los hechos ocurren en la más absoluta soledad. "En el distrito de Orurillo –manifiesta la viuda de Víctor Quispesayhua-- había mucho miedo y su esposo, desde la fecha que quemaron el puesto de la Policial ya no era igual." Cuando tomaba –revela— lloraba y tenía miedo "dice me van matar, me van matar decía mi esposo." Para ese entonces, salvo su esposo, "ninguna autoridad había, ellos vivían en otras partes, no teníamos a donde quejarnos. La viuda de don Mario

[87] Aparte de las antes citados informes de la Vicaría de la Solidaridad de Puno, información contenida en los párrafos siguientes ha sido tomada de Instituto de Defensa Legal, Perú 1989: En la espiral de la violencia, pp. 41-42.
[88] Ibid., p. 42.

Lizandro, presidente de la CAP Quisuni, quiso defender a su esposo recibiendo por ello un disparo en la pierna izquierda. Vinieron luego los tres tiros que terminaron con su cónyuge. Uno le dio en la cabeza, "por eso todos sus sesos estaban por todo el cuarto, y los huecos de las tres balas están hasta ahora en el cuarto. Y tras ello la sentencia final: "¡así van a morir todas las malas hierbas del campo!, que no haya autoridades, para que todos tengan todo por igual, nosotros buscamos la igualdad para todos." Al despedirse, una mujer a quien llamaban "Nancy" le dice "vamos a ganar, todo esto lo hacemos por ustedes, me abrazó y lloró."

Tomás Quispesayhua Aguilar de 32 años era el menor del grupo de victimados cuya edad promedio sobrepasaba los 40. Todos estaban casados. Tomás Quispesayhua --cuyo hermano es el gobernador de la localidad-- se había vinculado con el PUM del que era considerado como uno de los más destacados "militantes campesinos." Su prestigio provenía de su participación en la lucha por la reestructuración de las EEAA al frente de la federación de Orurillo que reúne a unas 40 comunidades. Parte de esa lucha fue centralizar la venta de lana de alpaca y ovino. "Gracias a ello, Orurillo fue el primer distrito --según un informe del CODEH-Puno-- que negoció directamente, y con buenos precios, la producción de lana frente a los monopolios." El ajusticiamiento masivo del 3 de diciembre deja a Orurillo ya no sólo sin autoridades sino sin dirigentes, también con 8 viudas y 31 niños huérfanos.

Con 82 víctimas que superaban largamente a las 23 del año anterior culminaba lo que acaso había sido el año de mayor violencia en la historia reciente de Puno. A pesar de no haber conseguido su objetivo de frustrar la campaña electoral, en doce meses, el PCP-SL había conseguido inclinar a su favor el balance del poder en las zonas rurales del norte del departamento siendo sus logros de mayor relevancia: (1) haber copado el conjunto del "triángulo guerrillero" convirtiéndolo en base de lanzamiento para desplazamientos que cubrían un extenso abanico territorial: de San Juan del Oro (Sandia) y Cojata (Huancané) --sobre la línea fronteriza con Bolivia-- hasta Calapuja (Lampa), Ñuñoa (Melgar) --cerca del límite con el Cusco-- y Crucero (Carabaya) al norte; (2) establecer dos pelotones o columnas guerrilleras con sus respectivas fuerzas de apoyo miliciano y una amplia red de contactos: moviéndose entre Azángaro, Melgar y Carabaya la primera y limitándose a la provincia de Huancané la segunda. De unos 40 efectivos la primera y unos 20 la segunda; (3) desplazar al PUM de su bastión azangarino a través de su presencia militar en la localidad, intimidación de dirigentes y destrucción del IER Waqrani.

Eran estas, en el esquema senderista, las condiciones adecuadas para impulsar sin dilaciones la construcción del nuevo poder. "Si no se organiza a toda la masa -era lo que al respecto estipulaba el "pensamiento Gonzalo"- el nuevo Poder no podrá sostenerse por mucho tiempo. No cabe masas amorfas ni Poder sin masas organizadas bajo la dirección del Partido."[89]

[89] PCP, "Bases de Discusión," p. 391.

Acaso ensoberbecido por sus éxitos del año anterior, en la madrugada del 20 de enero de 1990, Olivares se lanza sobre la SAIS Sollocota encabezando una columna de unos 30 insurgentes. El destacamento de la Policía Nacional ahí instalado logra repeler el asalto. Los atacantes inician el repliegue dividiéndose por grupos. Las fuerzas del orden emprenden la persecución. Hacia el mediodía alcanzan al grupo encabezado por el "Gringo" quien muere acompañado de cuatro de sus camaradas. El mito Olivares había terminado. "Lo calificaban --comentó la prensa capitalina-- como el terrorista más sanguinario del que se haya tenido noticia en el Altiplano."[90] Cinco días después de la muerte de Olivares, en la ciudad de Huancané, Romeo Paca Pantigoso --militante del PUM, por ese entonces-- encabezaba la instalación del nuevo gobierno regional de la región José Carlos Mariátegui integrada por los departamentos de Puno, Tacna y Moquegua. Era, sin duda, el paradójico desenlace de un año por demás trágico.

2.17.6. Adiós a la tercera vía

Al PUM, la presidencia de la región no podía llegarle en peor momento. Prácticamente toda su breve historia, se había ido en concebir una alternativa frente al "corporativismo" aprista y el "proyecto dictatorial pequeño-burgués" del PCP-SL. Hacia noviembre de 1989 --cuando los votos puneños emigraron nuevamente hacia la izquierda-- ese proceso había llegado a un punto muerto. Era una verdadera paradoja --observó un militante pumista-- cuando el partido "se sumía en su más grande crisis, éste y la agonizante IU alcanzaban una importante victoria electoral."[91] Más que por los votos, a lo largo del último año, los sectores más radicales del partido habían estado preocupados por encontrar la manera hacer frente al desafío senderista en el campo.

La campaña de la columna encabezada por Olivares, en efecto, había prácticamente cercenado la capacidad del partido para actuar en el campo. A los golpes senderistas el PUM respondería con la llamada "táctica del vacío," que no era otra cosa que aprovechar la capacidad informativa de la red de la iglesia con el fin de replegar a cuadros y dirigentes en situación de peligro. El dispositivo dejaba un cierto margen de acción durante períodos de descenso de la actividad subversiva. De la destrucción del IER Waqrani, sin embargo, no había recuperación posible. El hecho, obligaba al partido a crear sus "propias estructuras." Había que imaginar proyectos "invisibles" -recomendó la dirección del partido- que nosotros podamos seguir utilizando enmascarando más estrictamente nuestra presencia."[92] Las consecuencias del "arrasamiento" del IER, sin embargo, iban más allá de los aspectos logísticos: habían significado un duro golpe para la red institucional en que el PUM basaba su presencia departamental.

---

[90] *La República*, Enero 28, 1990, p. 3
[91] PUM, "El Camino a lo Nuevo" (Informe y Balance de dos años del `Plan Piloto Ande Rojo y de los esfuerzos por llevar a cabo los acuerdos del II Congreso Nacional. Noviembre 1, 1991, p. 8.
[92] PUM, “Evaluación del Partido,” febrero 1990, p. 4.

Tras los bandazos dirigenciales y el desconcierto de la militancia -que observaba, desmoralizada, "la nula respuesta del partido frente a las agresiones sufridas por parte del PCP-SL"[93]-, los datos implacables de una nueva y efervescente realidad rural terminarían de convencer a los estrategas pumistas de que la era del Ande Rojo había llegado a su fin.

> Nos encerramos en la defensa de supuestos "intereses comunales" y en alternativas de corte "colectivista," sin apreciar que el proceso de diferenciación campesina en curso y la recomposición de poderes locales venía redefiniendo las relaciones entre comuneros, entre éstos y los feudatarios y entre los diversos sectores de la sociedad rural, impactada, además, por una prolongada crisis económica, por políticos populistas (Alan García) y asistencialistas (ONG, Iglesia), por una década de desastres naturales y por la creciente violencia que actuaba como factor desestructurador y desestabilizador.[94]

A través de las áreas tocadas por las tomas, en efecto, un complejo panorama que se resistía a cualquier tipo de ordenamiento "desde arriba" comenzaba a prevalecer. A la par con amedrentamientos e intentos de desalojo se sucedían los acuerdos entre comunidades y cooperativas -ambas de reciente formación- mientras antiguas parcialidades volvían a quedar marginadas. Surgían -observó Víctor Caballero Martín-, "nuevas contradicciones" que escapaban al control de la FDCP, enfrentamientos entre comuneros y feudatarios; entre comuneros y comuneros; entre feudatarios y familias no campesinas que recibieron tierras, etc. Una verdadera eclosión de "negociaciones, luchas, acuerdos, actas, compromisos" conducidas "por los propios comuneros y feudatarios." Procesos que culminaban en "acuerdos informales" que los funcionarios estatales se limitaban a consagrar."[95]

En circunstancias tales -y con el PCP-SL plenamente embarcado en su fase post-"Gringo" Olivares- la presidencia de la flamante región José Carlos Mariátegui, más que una oportunidad para avanzar era un lugar para sobrevivir. Su fuerza electoral en el campo había llevado a la izquierda a ser mayoría en la asamblea regional. En la formación del primer Consejo Regional, más aún, el PUM apareció como la primera fuerza. Un análisis posterior del propio partido reconocería lo poco preparados que para aquella responsabilidad estaban sus cuadros: “A pesar del importante papel desempeñado por nuestro partido en el debate parlamentario sobre la regionalización y de la participación de nuestros cuadros en las luchas regionalistas, lo cierto es que no se realizó el cálculo ni se tomó las previsiones para un eventual ejercicio de gobierno en alguna región”[96]

En efecto, a pesar de que el PUM había conducido por varios años la lucha por la regionalización nunca había dejado de verla como un “espacio de acumulación”, como un mero terreno de conflicto aprovechable en la perspectiva de generar un movimiento de masas poderoso.

---

[93] PUM, “Balance de la situación del partido,” (VII Comité Central), junio 1990, p. 4.
[94] PUM, “El Camino a lo Nuevo,” p. 7.
[95] Víctor Caballero Martín, "La Realidad de las Reestructuración de las Empresas Asociativas en Puno" en Puno, Tierra y Alternativa Comunal (Experiencias y propuestas de política agraria), Lima 1991, pp. 133-157.
[96] Región José Carlos Mariátegui: organización para un gobierno de izquierda (logros y limitaciones)” (ms).

En otras palabras, la cuestión de ejercer el gobierno no revestía importancia estratégica. De ahí entonces que mientras sus militantes se esforzaban por asumir las tareas de gobierno su partido emitía la directiva de que había que impulsar un "gobierno de confrontación y no de concertación."

Sobre estas inciertas bases se formó, en enero de 1990, un gobierno conformado por una alianza de agrupaciones de la IU encabezadas por el PUM que sobreviviría ocho meses. En octubre, el UNIR y el PCP se asociaban al PAP y al FREDEMO para constituir un nuevo gobierno, manteniendo al ingeniero Romeo Paca como presidente quien, de esta manera, hacía abandono de su militancia pumista para presidir un ejecutivo regional plural. El PUM quedaba así aislado y en camino de la marginalidad: "Habíamos soñado con una sierra poblada de empresas comunales -recuerda otro dirigente mariateguista- olvidando que se trataba de un campesinado pobre." Se hubiesen necesitado subsidios ingentes para poner en marcha a las decenas de empresas comunales que esperábamos formar. "¿Cómo protegerlas sin violentar el mercado?"[97] El gran error había sido:

> No apreciar procesos económicos que tienen muchos años. Creer que podíamos derrotar al mercado en base a transferir recursos de programas de desarrollo. Mantener la tensión comunero-feudatario había sido absurdo. Pretender establecer cualquier forma colectivista o estatista era contrario a la historia. En todos los sitios en que habíamos tenido esa experiencia se había manifestado así.[98]

A través de las áreas tocadas por las tomas, en efecto, un complejo panorama que se resistía a cualquier tipo de ordenamiento "desde arriba" comenzaba a prevalecer. A la par con amedrentamientos e intentos de desalojo se sucedían los acuerdos entre comunidades y cooperativas de reciente formación mientras parcialidades de antiguo origen volvían a quedar marginadas. Surgían -según observó Víctor Caballero Martín-, "nuevas contradicciones que escapaban al control de la FDCP," enfrentamientos entre comuneros y feudatarios; entre comuneros y comuneros; entre feudatarios y familias no campesinas que recibieron tierras, etc. Una verdadera eclosión de "negociaciones, luchas, acuerdos, actas, compromisos" conducidas "por los propios comuneros y feudatarios." Procesos que culminaban en "acuerdos informales" que los funcionarios estatales se limitaban a refrendar.[99] Ante el fracaso del partido para organizarla, la "autodefensa" campesina tomaba un curso similar.

En algunos casos, los pueblos parecían aceptar las condiciones impuestas por el PCP-SL, estableciendo, al mismo tiempo, "mecanismos de protección de la autoridad local."[100] Asumir rotativamente los cargos directivos era otra opción. La organización comunal se camuflaba, en ciertos casos, bajo el comité popular senderista desde el cual -a pesar de la oposición de sus mandos- se mantuvieron vínculos con las contadas entidades de desarrollo que actuaban en la "zona roja" del departamento. Núcleos de feudatarios cerraron filas con gerentes de EEAA en defensa de lo que

---

[97] Entrevista con Víctor Torres Lozada.
[98] Entrevista con Dante Vera Miller. Lima, agosto 19, 1993.
[99] Víctor Caballero Martín, "La Realidad de las Reestructuración de las Empresas Asociativas en Puno" en Puno: tierra y alternativa comunal, pp. 133-157.
[100] Yolanda Rodríguez, "Los actores sociales y la violencia política en Puno" en *Allpanchis* no. 39, 1992, pp. 131-154.

quedaba de sus propiedades. Se arman, gestionan la instalación en sus predios de guarniciones militares o negocian algún tipo de pacto con la columna senderista.

Ante la guerra y las nuevas realidades económicas, el campesino responde con un "cálculo realista de sus propias capacidades."[101] Obtiene la tierra, busca la manera de protegerla; opta tal vez por parcelarla. Si los riesgos se incrementan, la deja encargada y migra, retornando apenas las condiciones lo permiten. "Sobre esta situación política y militar concreta, es que el campesinado comunero actúa, ordena su vida, la producción y sus festividades; calcula, resiste y aprende sin comprometerse; calla, oculta, apoya, denuncia; hasta que decide castigar con sus propias manos y organizarse para autoprotegerse."[102]

Un trágico incidente ocurrido en la CAT Quisuni es ilustrativo de las tensiones que atravesaban al "movimiento democrático" pro-campesino. Bajo la dirección de la FDCP varias comunidades toman tierras de dicha cooperativa en julio de 1990. Sorpresivamente, se hace presente la columna senderista y asesina a seis trabajadores de esa entidad reiterando, una vez más, su consigna de que el único camino para conseguir la tierra es "con las armas en la mano." Los días subsiguientes llueven las acusaciones contra el PUM, la FDCP y los "curas comunistas" de la prelatura de Ayaviri. ¿Era sensato seguir alentado la lucha por la tierra si no se podía proteger a los implicados? Bajo presión, en un comunicado bastante firme, la propia Prelatura de Ayaviri se distancia de las tomas, afirmando su rechazo a cualquier tipo de acto de violencia e invocando a que el problema de la tierra se solucione por la vía del diálogo y la democracia. Por último, deslinda responsabilidades señalando, con nombre propio, a quienes por varios años han dirigido el IER Waqrani como personas que "actúan a título personal."[103] La radicalización del movimiento -reconocería un dirigente mariateguista- tendría sobre el bloque pro-comunero un "efecto disolvente."[104] De ahí, entonces que, frente a la declaración, en octubre de 1990, de varias provincias altiplánicas en estado de emergencia, no se produjese una movilización similar a la mediados de los 80. La medida parecía ser el final de la ya debilitada "tercera vía" a la vez que reavivaba los temores de que Puno se convirtiese en "otro Ayacucho."

2.17.7. Los caminos de la contrainsurgencia

Desde su entrada a fines de 1982 a Ayacucho, hasta fines de 1990, se habían producido cambios significativos en la visión contrainsurgente de los militares peruanos, incidiéndose más, por ejemplo y poniendo énfasis en ganar el respaldo de la población.[105]

---

[101] Consejo de Desarrollo Alternativo de Puno, "Situación y Perspectivas del proceso político-social y de la guerra interna en Puno. Propuestas y Alternativas de Pacificación." Puno, noviembre de 1992, p. 7.
[102] Ibid.
[103] "Comunicado de la prelatura de Ayaviri", 31 de julio de 1990.
[104] Entrevista con Víctor Torres Lozada.
[105] Además de los trabajos de Gorriti y Obando sobre la evolución de la estrategia contrainsurgente de las Fuerzas Arnadas peruanas, véase: Philip Mauceri, Militares: insurgencia y democratización en el Perú, 1980-1988, Lima: Instituto de Estudios

Al cabo de una década de experimentación, más aún, acaso podría decirse que las FFAA avanzaron en el camino de una estrategia propia, con "notorio carácter autoritario" aunque sin los visos "genocidas" de, por ejemplo, la seguida años antes por los militares guatemaltecos.[106] Su aplicación coloca al régimen civil ante la disyuntiva de, asumir la conducción directa de la guerra subordinando a cualquier costo a las FFAA o promulgar el marco legal demandado por los militares como condición imprescindible para terminar con la subversión. El "autogolpe" del 5 de abril de 1992 será la respuesta a dicho dilema.

En Puno, como en otros departamentos serranos, los policías tradicionales habían constituido la primera línea de contención frente al PCP-SL. Sin entrenamiento y pobremente armados fueron obligados a replegarse. En una segunda etapa se introdujeron fuerzas especializadas y se intentaron nuevas fórmulas de acción conjunta policial-militar (Unidades Tácticas Antisubversivas y Destacamentos de Operaciones Especiales). Emplazados en EEAA y centros mineros, su presencia significó una recuperación parcial de la iniciativa en las zonas rurales. Su actuación, sin embargo, creó controversia. "No queremos que Puno viva los momentos dramáticos que vive el pueblo de Ayacucho -sostuvo una declaración de las vicarías de solidaridad, pocas semanas después del inicio de la emergencia- como producto de una "guerra sucia donde la principal víctima ha sido y sigue siendo el pueblo pobre." Los temores, sin embargo, irían diluyéndose con el correr de los meses. Un año más tarde, un representante de la vicaría de Juli declaraba:

> Nuestra relación con las FFAA era en un principio tirante. Pero cuando como Vicarías de la Solidaridad les llevamos denuncias de violaciones de derechos humanos y de abusos contra la población civil, reaccionaron diferente. Investigaban y sancionaban rápidamente. La relación se ha modificado. No hay desapariciones y salvo el caso de Chillutira, tampoco ejecuciones extrajudiciales. Ellos llegaron con la consigna de armar a las rondas campesinas y como hubo una fuerte oposición canalizada por el gobierno regional desistieron de eso. Son permeables entonces.[107]

El Ejército, en suma, muestra un sorprendente autocontrol y tras la aparente pasividad, sin embargo, se despliega una nueva estrategia en el que muchos ven una sospechosa pasividad para actuar contra el PCP-SL. Se llega a sostener que la estrategia militar consiste en esperar que el PCP-SL y el movimiento campesino, "se enfrenten y se desgasten solos."[108] Los propios militares explican de otra forma su cauteloso accionar: "Fácil sería ordenar un ataque masivo a una comunidad

---

Peruanos, 1990 y Carlos I. Degregori y Carlos Rivera, FFAA, Subversión y Democracia: 1980-1993, Lima: Instituto de Estudios Peruanos, Documento de Trabajo no. 53, 1993.

[106] Ibid., p. 14. Sobre el caso guatemalteco véase, Robert M. Carmack, editor, Harvest of Violence. The Maya Indian and the Guatemalan Crisis, Norman and London: University of Oklahoma Press, 1988 y Ricardo Fall, Massacres in the Jungle. Ixcán, Guatemala 1975-1982, Boulder, Colorado: Westview Press, 1992.

[107] Guido Gallegos, "el PCP-SL nos ve como sus enemigos políticos" en *Ideéle* no. 32-33, Diciembre 1991, p. 31. Los cambios en la percepción de la situación puneña pueden seguirse a través de los siguientes artículos publicados por *Ideéle* a lo largo de 1991: "Estado de emergencia en el sur, persistiendo en el error" (no. 24); "Qué pasa en las nuevas zonas en "emergencia"?" (no. 25); "Puno: Entre la emergencia y la pacificación" (no. 28); "Puno y San Martín: la paz busca un camino" (nos. 32-33) y "La batalla por Puno" (no. 39).

[108] Romeo Paca, "Política de Pacificación en la Región Jose Carlos Mariátegui" en Una ruta posible (Propuestas de la I Conferencia por la Paz), Lima: IDS, 1991, pp. 81-91.

presuntamente terrorista, pero eso sería perder todo lo que se ha avanzado hasta ahora en apoyo a la población": "Sabíamos que después de su derrota en Ayacucho, Puno iba a ser su teatro de operaciones más importante. Aquí, el problema era que la subversión había penetrado en todas las esferas sociales. Se requería, por lo tanto una estrategia global."[109]

Ganar al mundo de las ONGs, los proyectos de desarrollo y la Iglesia, del lado de la contrainsurgencia era, en tal sentido, un paso crucial que los militares acometieron mediante la adopción de una política que combinaba las presiones, el diálogo y una relativa apertura.

La instalación, a inicios de 1990, de la Región José Carlos Mariátegui (RJCM) -que reunía a los departamentos de Puno, Tacna y Moquegua- permitiría a la izquierda reactivar el planteamiento de una pacificación bajo conducción civil y con participación de la población. Aunque reconocía "el hartazgo con la persistencia de la violencia y la muerte" prevaleciente en amplios sectores de la población regional, el PUM -cuyos militantes ocupaban las más altas posiciones del nuevo gobierno regional- reafirmaba la necesidad de impedir que "el gobierno, las FFAA y la reacción," capitalicen este "pacifismo elemental e instintivo" para convertirlo en "respaldo a la guerra contrasubversiva." Reafirmaba, por lo tanto, su posición de "denunciar al gobierno como factor contrario a una paz verdadera, duradera y justiciera" acordando una "plataforma mínima" para crear las condiciones para "una salida política y democrática a la guerra" que incluiría, "el diálogo con los grupos alzados en armas."[110]

Para ese entonces, no obstante, muchos en la "izquierda legal" creían en la necesidad de tender puentes a las FFAA como condición para derrotar al PCP- SL. Desacuerdos en torno a este tema distanciaron a Romeo Paca Pantigoso del PUM. En un inicio, Paca Pantigoso había subrayado el compromiso de su Gobierno a culminar el proceso de reestructuración, "terminando con los gerentes antidemocráticos y corruptos" e incluyendo en la afectación "a la totalidad de las maquinarias y el capital" de las EEAA. Había incidido, asimismo, en buscar "paz con justicia social" llegando inclusive a apelar a los senderistas, llamándolos a dejar el camino "absolutamente equivocado" de su "jefe regional que hoy se encuentra muerto (Olivares) y a integrarse a comunidades campesinas, sindicatos, organizaciones gremiales, en la lucha anticentralista.

Los intentos de incluir al Ejército en el debate de la estrategia regional de pacificación serían vistos desde el PUM como intentos de conformar un "gobierno regional cívico-militar." Inicialmente, el Gobierno Regional había explorado la posibilidad de formar grupos de autodefensa. Al menos en un caso, sin embargo, dicho experimento había suscitado duras represalias senderistas y el plan abortó tempranamente. Desde mayo de 1991, en que el PCP-SL había ingresado a Macusani arrasando el local municipal, el Alcalde de Carabaya, Justo Pastor Luque Quico (IU), encargado de Derechos Humanos del Gobierno Regional, se veía obligado a residir en Puno. "La crisis de la fibra de alpaca ha favorecido mucho la penetración de el PCP-SL en esa zona" nos dijo. "Los jóvenes sin tierra –añadió--

[109] Entrevista con el Coronel EP Alberto Pinto Cárdenas. Puno, febrero 24, 1995.
[110] PUM, "Lineamientos de táctica sobre la pacificación." Mayo 24, 1991.

, los sectores más inestables, acosados por el Ejército, son los que se van con SL." Por la misma época en que el Alcalde Luque se refugiaba en Puno, el PCP-SL asesinó en una calle de Juliaca a otro miembro de la Asamblea Regional: Porfirio Suni, víctima un par de años antes de la violencia del otro lado, como vimos.

Ante los hechos, la posición del Presidente Regional con respecto a la pacificación es para ese entonces bastante definida, proponiendo que el Gobierno Regional juegue un papel en ayudar a que las FFAA se conviertan en aliados del movimiento popular.

De manera similar, el núcleo partidario del PUM de la provincia de Melgar se había declarado en rebeldía contra la dirección nacional. El origen de esta pugna con la dirección nacional del partido se remontaba a los tiempos del ataque al IER Waqrani cuando, según Ricardo Vega, el PUM había abandonado a su gente en Ayaviri a su propia suerte.

En los meses siguientes, la división se trasladó al seno de la FDCP. A comienzos de 1991, con ocasión del IV Congreso de la FDCP quedó en evidencia que las diferencias habían llegado a un punto irreconciliable. Casi en su totalidad, el evento fue consumido por la pugna entre dos facciones por el control de la federación. A la división partidaria proseguía la división del gremio y con ello la quiebra del bloque pro-comunero gestado en torno al respaldo de la lucha por la tierra.
El propio presidente del Gobierno Regional adoptó una actitud crítica hacia la FDCP cuestionando su representatividad. En ese contexto, un grupo de ex-asesores de la FDCP –incluido Ricardo Vega Posadas-- optó por trabajar en la formación de un Consejo Unitario de Productores Agrarios, entendido como una representación más acorde con los múltiples intereses del campo puneño. A este nuevo espacio se sumó CENECAMP y la organización de los trabajadores de las empresas asociativas (FENATEPS) que, favorecidas por el nuevo clima político, encontraría las condiciones para salvar parte de su patrimonio, las ERPS sobretodo que no tenían la presión comunal que las SAIS confrontaban. Paca –según otro vocero del sector asociativo— había prometido que "en menos de 30 días él liquidaba todas las empresas campesinas" no pudiéndolo hacer porque CENECAMP "ya no era la antigua fuerza de los gerentes" sino que ahora "había fuerzas y participación de los trabajadores" que le habían hecho retroceder.[111] En tales condiciones, a mediados de 1991, el Obispo de Puno --Jesús Calderón-- fustigó de la siguiente manera a sus antiguos amigos: "Aquí en Puno la propia Federación está dividida a raíz de la ruptura del PUM, esto es escandaloso. ¿Cómo entonces se puede hacer causa común contra la violencia? A la región le corresponde abrazar el pluralismo, no estoy de acuerdo en que sea hegemonizado por un sólo partido. Esto es lo que la está haciendo fracasar."[112]

El PUM, la FDCP, el movimiento democrático, que había sido soporte de la 'tercera vía,' habían entrado en la etapa final de su disgregación.

[111] Entrevista con Luis Ortiz (Presidente de la CENECAMP de Puno). Puno, agosto de 1992.
[112] En *Ideéle* no. 28, agosto 1991, p. 12.

De hecho, para muchos dentro de la Iglesia, la lucha por la paz no implicaba los niveles de confrontación con el gobierno de los 80. A inicios de 1992, la Iglesia había asumido la organización del semi-oficial Consejo por la Paz y la Vida. En los días que prosiguieron al "fujigolpe" del 5 de abril de 1992, algunos de sus integrantes propusieron hacer público un pronunciamiento sobre los acontecimientos. Fue imposible, no obstante, lograr un acuerdo sobre el significado de los mismos. Uno de sus miembros sostuvo que este debía pronunciarse en contra del "golpe" en coordinación "con todos los partidos políticos y dirigentes de las diferentes organizaciones." Otro propuso dirigirse al Presidente de la República para "expresarle el amplio apoyo y respaldo a las medidas tomadas por el Supremo Gobierno para moralizar el Parlamento y Poder Judicial" y pedirle "que se tomen las medidas necesarias para que la Pacificación Nacional no se vea envuelta en situaciones de violencia." Finalmente, un tercer miembro se opuso a hacer un pronunciamiento porque sería visto como una "cuestión política" mientras que, "la organización que instalamos el 24 de marzo pasado en la ciudad lacustre solo persigue lograr la pacificación en el Perú teniendo como esencia los principios cristianos." El desacuerdo era el punto final de un breve e intenso proceso en el cual, uno tras otro, el PAP, la izquierda, la regionalización y el PCP-SL colapsarían dejando el terreno libre al enseñoreamiento del fujimorismo.

2.17.8. A manera de conclusión

La crisis del Puno ganadero de las grandes haciendas y la ruta de la lana --de las alturas de Melgar a Manchester, Inglaterra--, las nuevas contradicciones creadas por la reforma agraria, la debilidad de las propuestas regionales creó el contexto en que diversas prácticas y discursos intentaron encabezar la transición hacia un nuevo orden. Proyectos políticos nacionales que veían en Puno una valiosa frontera de expansión: Puno como cabeza de un “ande rojo;” Puno como capital del “trapecio andino;” Puno como “trinchera de combate del sur.” Todos, de diversas maneras, buscaron captar las energías que las demandas campesinas generaban. Los diversos enfoques ideológicos que en ese afán pusieron en juego asignaban a la protesta rural diversos grados de potencial transformador. Los apristas retrotrayeron viejos ideales agraristas y recuperaron antiguas visiones más bien románticas de la comunidad. Otro tanto hicieron sus adversarios del PUM que, a su vez, pretendían crear un nuevo tipo de movimiento regional impulsado por la “fuerza histórica” del campesinado. SL por su parte llegó a la región con un esquema maoísta que colocaba al campesinado pobre como protagonista central de la revolución. Todas estas fuerzas, en diverso grado, llegaban dispuestas al uso de la violencia. La política puneña, entonces, tomó la forma de una compleja batalla regional.¿Logró SL afirmarse en Puno? ¿Fue la ‘tercera vía’ una posibilidad real? ¿Quién ganó?

Más allá de las interpretaciones que de los acontecimientos regionales hacen los activistas partidarios o del posible uso que buscan dar al capital político acumulado en los confines del sistema político, son los propios campesinos quienes -en consecuencia con su particular visión de los

acontecimientos regionales y nacionales- toman las decisiones claves que determinan la evolución de la "batalla por Puno." Toleran, respaldan o sancionan a la guerrilla, se alían con los agentes pastorales y los militantes izquierdistas en buscan de realizar su propia agenda o toman la palabra al Presidente, encargándose de velar por el cumplimiento de sus ofertas, llevando hasta su conclusión última la lógica pro-comunera de su discurso. Su aceptación condicionada del programa militar termina siendo, asimismo, el factor esencial del desenlace de la contienda. Son ellos, a fin de cuentas, quiénes con sus acciones hacen de la "tercera vía" una posibilidad alcanzable y quienes sancionan su posterior irrelevancia.

Es en el contexto comunal -con todas sus contradicciones y diferenciaciones internas- en que se toman las decisiones que determinan el sentido de la acción campesina. Frente a las propuestas -revolucionarias, reformistas o modernizantes- de los intelectuales partidarios, eclesiásticos o estatales, los intelectuales campesinos articulan visiones políticas sustentadas en tradiciones locales de larga data. El sentido de continuidad de tales visiones, sin embargo, no suprime la actualidad y pragmatismo de las decisiones contemporáneas.

En el caso del campesinado del norte puneño, tal requisito obliga a referirse a las primeras décadas del siglo, cuando el proyecto comunal fue derrotado por las haciendas en el contexto de una expansión de la actividad exportadora lanera. El triunfo de las haciendas no significó la proletarización masiva de los campesinos ni, mucho menos, la desaparición de la comunidad. Fue el inicio, más bien, de una sorda lucha que, a lo largo de varias décadas, implicó la incorporación de nuevos actores y nuevos esquemas de dominación que aseguraran la continuidad del esquema definido hacia 1920. Es a través de la prolongada brega con proyectos de desarrollo, organismos internacionales, misiones adventistas y congregaciones católicas, agencias estatales y ONGs, que se va forjando la cultura política del campesinado altiplánico. A través de múltiples alianzas y coaliciones, en otras palabras, efímeras o más o menos duraderas; genuinas o engañosas; acaso cruciales para garantizar su supervivencia, no así para asegurar el fin de su marginación.

20 0 20 40 60 80 100 Kilometers

PUNO

LEYENDA

- Límite Departamental
- Límite provincial
- Capital de departamento
- Capital de provincia
- Centro Poblado